
Número 15

GUERRA Y HAMBRUNA EN AFRICA
Consideraciones sobre la Ayuda Humanitaria

Karlos PEREZ DE ARMIÑO

Karlos PEREZ DE ARMIÑO es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Estudios Internacionales y Ciencia Política por la Universidad del País Vasco. Su tesis, realizada en HEGOA, trató sobre la seguridad alimentaria, el derecho al alimento y la ayuda internacional en el Africa Subsahariana. En la actualidad investiga en HEGOA en torno a la rehabilitación posbélica en Mozambique, con una beca del Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco



INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO Y LA ECONOMIA INTERNACIONAL. UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
NAZIOARTEKO EKONOMIA ETA GARAPENARI BURUZKO IKASKETA INSTITUTUA. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Facultad de Ciencias Económicas
Avenida Lehendakari Agirre, 83
Tfnos. (94) 447 35 12 · 447 16 08
Fax (94) 476 26 53
48015 BILBAO

Manuel Iradier, 6 bajo
Tfno. (945) 13 15 87
01006 VITORIA-GASTEIZ

GUERRA Y HAMBRUNA EN AFRICA
Consideraciones sobre la Ayuda Humanitaria

Karlos PEREZ DE ARMIÑO

Cuadernos de Trabajo de Hegoa
Número 15
Abril 1996

D.L. BI-1473-91
ISSN: 1130-9962

Impresión: IDAZKIDE S.A.L.

CUADERNOS DE TRABAJO DE HEGOA es una publicación destinada a difundir los trabajos realizados por sus colaboradores, así como aquellos textos que por su interés ayuden a la comprensión de los problemas del desarrollo y las relaciones internacionales.

INDICE

Introducción	5
1.Hambrunas y seguridad alimentaria	6
2.Militarismo, guerra y vulnerabilidad	14
3.Sustrato local de los conflictos africanos	16
4.Guerra, economía paralela y transferencia de recursos	18
5.Tácticas militares propiciatorias de la hambruna	22
6.Perjuicios de la guerra para la seguridad alimentaria	24
6.1.Freno para el desarrollo económico	24
6.2.Destrucción de los alimentos y de los recursos para producirlos	24
6.3.Destrucción de servicios e infraestructuras	26
6.4.Disminución de la proporción entre productores y consumidores de alimentos	26
6.5.Degradación medioambiental	27
6.6.Obstaculización del movimiento de alimentos y personas	27
6.7.Alteración de las relaciones sociales y de género	27
7.Conclusiones: implicaciones para la ayuda internacional	29
Bibliografía	33

*Hagan los elefantes la guerra o el amor,
es la hierba la que sufre.*

Proverbio Swahili

INTRODUCCION

Los conflictos internos se han revelado como el principal causante de las crisis alimentarias del Africa Subsahariana a partir de los años 80. El objeto de este trabajo consiste, precisamente, en analizar la naturaleza y la creciente interrelación de la guerra y la hambruna en la región, así como subrayar algunas limitaciones que presenta la comunidad internacional a la hora de afrontarlas.

Con tal fin nos haremos eco de algunos modelos teóricos recientemente planteados para mejorar la comprensión sobre el carácter y la dinámica de las llamadas *emergencias complejas*. Este concepto se emplea crecientemente para denominar a un nuevo tipo de crisis humanitaria, propio de la post-Guerra Fría, caracterizado por una combinación de guerra civil, hambruna, desplazamientos poblacionales y quiebra del Estado nación (Slim y Penrose, 1994:194). Dichos conflictos, que implican con frecuencia a movimientos de secesión o liberación nacional, suelen verse espoleados por la resurgencia de la etnicidad o la intolerancia religiosa o cultural, factores locales que han ganado relevancia al disiparse la confrontación bipolar entre las superpotencias. Además, el conflicto encuentra su caldo de cultivo en el empobrecimiento derivado de la crisis económica, los programas de ajuste estructural y la degradación ecológica, que aumenta la competencia por unos recursos naturales menguantes.

Este tipo de emergencias caracterizadas por el conflicto son, por tanto, mucho más complejas que las crisis alimentarias motivadas simplemente por catástrofes medioambientales o económicas. El principal rasgo distintivo consiste en que se trata de emergencias creadas intencionalmente, por una combinación de intereses que promueven y mantienen los conflictos con objetivos económicos, políticos o de genocidio cultural. De este modo, el Estado frecuentemente no tiene voluntad de proporcionar ayuda, o manipula ésta de forma sectaria. Además, se trata de convulsiones que responden a causas múltiples, arraigadas en las estructuras socio-

económicas, políticas y culturales, y que afectan a todas las facetas de la vida social: el conflicto desposee a unos y enriquece a otros, fuerza a éxodos masivos y prolongados (más que en el caso de las sequías), y genera profundos y duraderos perjuicios para el desarrollo, la salud y el bienestar.

Ahora bien, si a estas emergencias se les llama hoy complejas no es sólo porque ocasionen mayores penalidades a las víctimas, sino más bien porque su resolución es más complicada para la comunidad internacional. En efecto, el orden mundial posterior a la distensión entre las superpotencias ha abierto nuevas posibilidades de intervención internacional directa sobre el terreno, incluida la militar, que a veces acaba convirtiéndose en parte del problema, como en el reciente caso de Somalia.

Sin embargo, a pesar de que se trata de catástrofes diferentes y mucho más complejas que las de tipo medioambiental o económico, la ayuda humanitaria internacional ha sido diseñada para responder básicamente a estas últimas. En efecto, la ayuda parte de una deficiente comprensión de la hambruna, particularmente en situaciones de conflicto. Ha tendido a verla de forma simplista, como una deficiencia en el consumo de alimentos, sin comprender su carácter y dinámica, en particular los objetivos y estrategias tanto de los que pierden como de los que ganan en ellas, así como el impacto negativo que la propia ayuda puede a veces tener al perpetuar el conflicto.

En definitiva, resulta necesario reflexionar sobre la naturaleza de la hambruna y los conflictos, y sobre su relación mutua, a fin de poder desarrollar modelos de prevención y de socorro que sean más eficaces y que se orienten a sus víctimas, más que a sus beneficiarios. Para ello es preciso que las intervenciones internacionales adquieran un carácter más global, integrando iniciativas para una paz sostenible basada en el desarrollo socioeconómico equitativo y el respeto de los derechos humanos.

1.

HAMBRUNAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Para comenzar, debemos tratar de responder a una pregunta básica: ¿Qué es una hambruna?, ¿Cuáles son su naturaleza, sus causas y su dinámica? Sólo haciendo un diagnóstico acertado será posible un tratamiento correcto por parte de la ayuda internacional. Sin embargo, muchos gobiernos y ONGs parecen partir de una comprensión insuficiente del fenómeno, basada en modelos inadecuados o desfasados, que obstaculizan una intervención adecuada.

Aunque las hambrunas afectan a muchas menos personas que el hambre endémica, su carácter localizado y virulento hace recaer sobre ellas más atención por parte de la opinión pública y la ayuda internacionales. En cualquier caso, como veremos, una y otra están estrechamente relacionadas. Durante los últimos quince años, una creciente bibliografía especializada ha contribuido a una mejor comprensión tanto de la una como de la otra.

Tal avance teórico se ha caracterizado esencialmente por dos procesos. Por un lado, la explicación de las causas del hambre y las hambrunas ha pasado de poner el acento en causas naturales a priorizar factores sociales, como la pobreza. En segundo lugar, el problema ya no se analiza sólo con datos macro a nivel nacional, sino más bien en base a la situación específica a nivel familiar de los sectores vulnerables.

Esta evolución se traduce en la sucesión de tres modelos consecutivos de explicación de las hambrunas:

a) El modelo convencional, de disminución de los suministros

Desde la época de Malthus hasta la primera mitad de los 80, las hambrunas se han explicado en base a lo que se ha denominado el enfoque del *descenso de la disponibilidad de alimentos* (DDA). Este las concebía como hundimientos en los suministros alimentarios per cápita, motivados por factores naturales: catástrofes climáticas que mermarían las cosechas, o un crecimiento de la población que acabaría desbordando el abastecimiento. Al estimar sólo cifras agregadas promedio (el total de los suministros entre el total de la población), no tomaba en consideración la desigualdad social en el reparto de los alimentos que se esconde tras tales cifras incluso cuando son satisfactorias. Esto le llevaba a plantear como objetivo el aumento de los suministros (producidos o importados), soslayando la necesidad de políticas redistributivas en favor de los más vulnerables.

Desde esta perspectiva, las hambrunas aparecen como fenómenos naturales y, por tanto, casi inevitables. Las catástrofes climáticas se escapan al control humano, mientras que, para los neomalthusianos, la superpoblación es una tendencia casi incontrolable e imputable, a lo sumo, a los propios hambrientos por su prolificidad. Estos planteamientos, además de ocultar las razones reales del problema, fomentan actitudes de resignación y negligencia políticas, desalentando así la adopción de medidas políticas para afrontarlo. Además, al no conferir espacio alguno a la acción y responsabilidad humanas, deja la problemática del hambre fuera del ámbito de la ética y del derecho.

Este enfoque sustentó la aparición en 1974 del concepto *seguridad alimentaria nacional* (SAN), entendida como el logro de unos suministros alimentarios per cápita suficientes a nivel de un país en todo momento, a través del aumento de la producción, las reservas y las importaciones. Ahora bien, al centrar su análisis en valores agregados promedio (el total de los recursos entre el total de la población), ignora las desigualdades sociales existentes en el reparto de los recursos alimentarios y que, por tanto, incluso unas cifras satisfactorias pueden esconder la existencia del hambre entre determinados colectivos. Desde este concepto, por tanto, no hay espacio para las políticas redistributivas de los recursos.

b) El modelo de pérdida de las titularidades

Desde finales de los 70, diversos autores comienzan a criticar el enfoque anterior en dos direcciones. Por un lado, entienden que la hambruna y el hambre frecuentemente no suelen ser consecuencia de una escasez de suministros de alimentos en el mercado, sino de la pobreza de algunos grupos sociales, con lo cual para su solución no bastaba con aumentar la producción alimentaria. Por otro, subrayan que los datos per cápita a escala nacional esconden la realidad, y que es preciso un análisis desagregado por familias.

Estas críticas al DDA cristalizaron en un modelo alternativo cuando el economista indio Amartya Sen formuló su *teoría de las titularidades* en su decisiva obra *Poverty and Famines*, de 1981. Las titularidades (*entitlements*) al alimento constituyen las capacidades o recursos de una familia o individuo para acceder al mismo de forma legal, produciéndolo, comprándolo o percibiéndolo como donación del Estado o la comunidad. Vienen determinadas, por tanto, por el nivel de propiedades poseídas, las relaciones de intercambio en el mercado (lo que se pueda comprar en función de lo que se posee) y el nivel de protección social.

Sen demostró, en base a diversos estudios de caso, que la hambruna no suele deberse a la escasez de los suministros, sino a una pérdida

repentina de las titularidades de los grupos sociales más vulnerables hasta un punto inferior al necesario para satisfacer las necesidades nutricionales. Por su parte, el hambre endémica refleja una carencia permanente de titularidades por tales sectores. En definitiva, en ambos casos se trata de un problema no de falta de alimentos, sino de falta de acceso al mismo por parte de los desfavorecidos.

Consiguientemente, la seguridad alimentaria nacional es un objetivo político necesario, pero no suficiente, pues no garantiza que las familias e individuos pobres puedan acceder a los alimentos. Al calor de este enfoque surgió así, en la primera mitad de los años 80, el concepto de *seguridad alimentaria familiar* (SAF). Una de sus definiciones más extendidas fue la del informe *La pobreza y el hambre*, del Banco Mundial (1986:1), como «el acceso de todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de alimentos suficientes para una vida activa y saludable». Se trata de una definición que resulta hoy insuficiente, como consecuencia del vigoroso desarrollo conceptual habido desde entonces en torno a la SAF.

El paso de la SAN a la SAF representa la transición desde un enfoque natural a un enfoque social en el análisis de la hambruna y el hambre. El primero las concebía como un problema de insuficiente producción nacional ligado a las ciencias naturales (demografía y climatología), que debe ser corregido por soluciones técnicas para el aumento de la producción. El segundo centra las causas en las desigualdades sociales y las soluciones en medidas redistributivas contra la pobreza.

c) El modelo de hambruna como proceso de transferencia de recursos

Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto, desde la segunda mitad de los 80, las limitaciones de la definición de seguridad alimentaria familiar dada por el Banco Mundial, así como de la teoría de las titularidades en la que se basó. En efecto, nuevos factores, antes no tomados en cuenta, han sido incorporados al estudio de la seguridad alimentaria, como por

ejemplo: el papel de las epidemias, las estrategias familiares contra la hambruna, las relaciones intrafamiliares, el valor cultural de los alimentos, las percepciones subjetivas en relación a la crisis, o la consideración de la alimentación como un derecho humano. De este modo, se ha configurado un enfoque alternativo, con un marco de análisis más amplio y una redefinición de la hambruna.

La crítica fundamental a la teoría de las titularidades se centra en que asume una definición occidental convencional de la hambruna, habitual en medios políticos y medios de comunicación. La concibe como un hundimiento repentino del consumo de alimentos que provoca una forma particularmente virulenta de inanición, la cual lleva a la muerte generalizada (Sen, 1981: 39-41). Es decir, se trataría de un acontecimiento puntual y esporádico, diferente al hambre, y caracterizado por el aumento de la mortalidad a causa de la inanición. La hambruna sería diferente al hambre como el hielo al agua: el punto de congelación o umbral que marca el inicio de la hambruna sería el incremento de la mortalidad.

Por el contrario, autores como Rangasami (1985a:1748) y De Waal (1989 y 1990: 470-471), han constatado que la hambruna no es un evento tan diferente del hambre, sino un *proceso* que tiene en ésta su punto de partida, y sólo en su última fase puede llevar, y no siempre lo hace, a una muerte masiva.

En efecto, en Africa, la visión de las propias víctimas es que la hambruna se inicia mucho antes de que aumente la mortalidad, diferenciando hambrunas de diferente intensidad, particularmente las *hambrunas que matan* y las *que no matan*. De hecho, la mayoría de las hambrunas del continente se caracterizan por una inanición no extrema, gracias a que la población despliega diferentes *estrategias de afrontamiento* contra la crisis. Es más, no es el aumento de la mortalidad su principal preocupación, sino más bien la miseria y la perturbación social. En definitiva, las víctimas la perciben no tanto como un proceso biológico que amenaza sus vidas, sino ante todo como un proceso socioeconómico de empobrecimiento que

amenaza sus sistemas de sustento (De Waal, 1989:75).

Igualmente, según Rangasami (1985a:1748), los estudios médicos demuestran que la inanición no surge repentinamente, sino que constituye un proceso prolongado en el que la adaptación metabólica permite un menor consumo durante semanas o meses, de forma que la inanición extrema y la muerte sólo llegan cuando se ha perdido un tercio del peso, al final del proceso de la hambruna.

De este modo, entienden que la definición de Sen se refiere en realidad sólo a la última fase de la hambruna, y no a toda ella. Además, al contemplarla como un evento aislado, a Sen le falta perspectiva histórica y política para analizar los procesos socioeconómicos que generan los sistemas de vida y las titularidades a medio y largo plazo. Se limita así a explicar la causa inmediata de la hambruna (la pérdida de titularidades), pero no sus causas de fondo o su dinámica una vez ha comenzado.

También critican la visión economicista de la teoría de las titularidades, que se centra únicamente en la pérdida del acceso al alimento y olvida otros factores esenciales en las hambrunas africanas, como el impacto de las epidemias y la violencia. De este modo, dicha teoría sería más apropiada para explicar las hambrunas asiáticas, motivadas por alteraciones en los precios, como la de Bangladesh de 1973.

En efecto, aunque Sen asume que el aumento de la mortalidad durante las hambrunas se debe a la inanición, De Waal (1989, 1990:479-481) subraya que la causa principal suelen ser las epidemias, propagadas gracias a la contaminación del agua, el hacinamiento de la población desplazada en busca de ayuda a centros urbanos, y la insalubridad por la quiebra de los sistemas de salud. Así lo prueba su estudio sobre la hambruna de Darfur, Sudán, en 1984-1985 (De Waal, 1989).

Por otro lado, la teoría de Sen se centra en los medios de control del alimento legalmente establecidos en una sociedad, por lo que no contempla la transferencia de titularidades en base a actos violentos como el saqueo y el bandillaje.

Del mismo modo, tampoco incluye factores como las migraciones o la desestructuración social que acompaña a las crisis alimentarias. Todos estos factores son esenciales en las hambrunas africanas, por lo que éstas no reciben una explicación satisfactoria desde el enfoque de Sen.

Otra deficiencia importante de dicha teoría es que contempla a las víctimas de las hambrunas como pasivas, sin capacidad de respuesta a la crisis. Sin embargo, numerosos estudios han puesto de relieve que aquéllas llevan a cabo diferentes *estrategias de afrontamiento* con el fin de preservar sus sistemas de sustento hasta que pase la crisis. La prioridad de los vulnerables no consiste en aumentar el consumo de alimentos, como se ha pensado tradicionalmente, sino en preservar la base de recursos productivos para el futuro, a fin de no caer en la miseria y poder recuperarse. Por eso están dispuestas a sufrir cierto nivel de hambre con tal de no tener que vender su ganado, consumir sus semillas o enajenar sus tierras (De Waal, 1990:475).

La adopción de estrategias de afrontamiento sigue una secuencia progresiva en el tiempo. Conforme la crisis se va agravando, se ponen en práctica estrategias cada vez más comprometedoras para el sistema de sustento, la salud y el medio ambiente, con lo que resulta cada vez más difícil retornar a la situación inicial. En la figura nº1 aparecen representadas algunas de las estrategias más habituales. Inicialmente se trata de medidas fáciles, como el cambio a cultivos más resistentes a la sequía o el consumo de alimentos no habituales (alimentos silvestres, raíces, insectos, etc.). Con el tiempo, si las anteriores no bastan para vencer la crisis, se van adoptando otras que implican la venta de bienes líquidos (joyas, utensilios), llegando después a la venta de los recursos productivos (ganado y tierra) y, por último, al éxodo en busca de ayuda.

El hecho de que estas estrategias se adopten de forma progresiva las convierte en un indicador útil para estimar el nivel de vulnerabilidad de quienes las llevan a cabo. Cuando implican la venta de bienes líquidos se puede hablar de una vulnerabilidad alta, que se convierte en extrema cuando se enajenan los de tipo productivo. De este modo, la observación de las estrategias

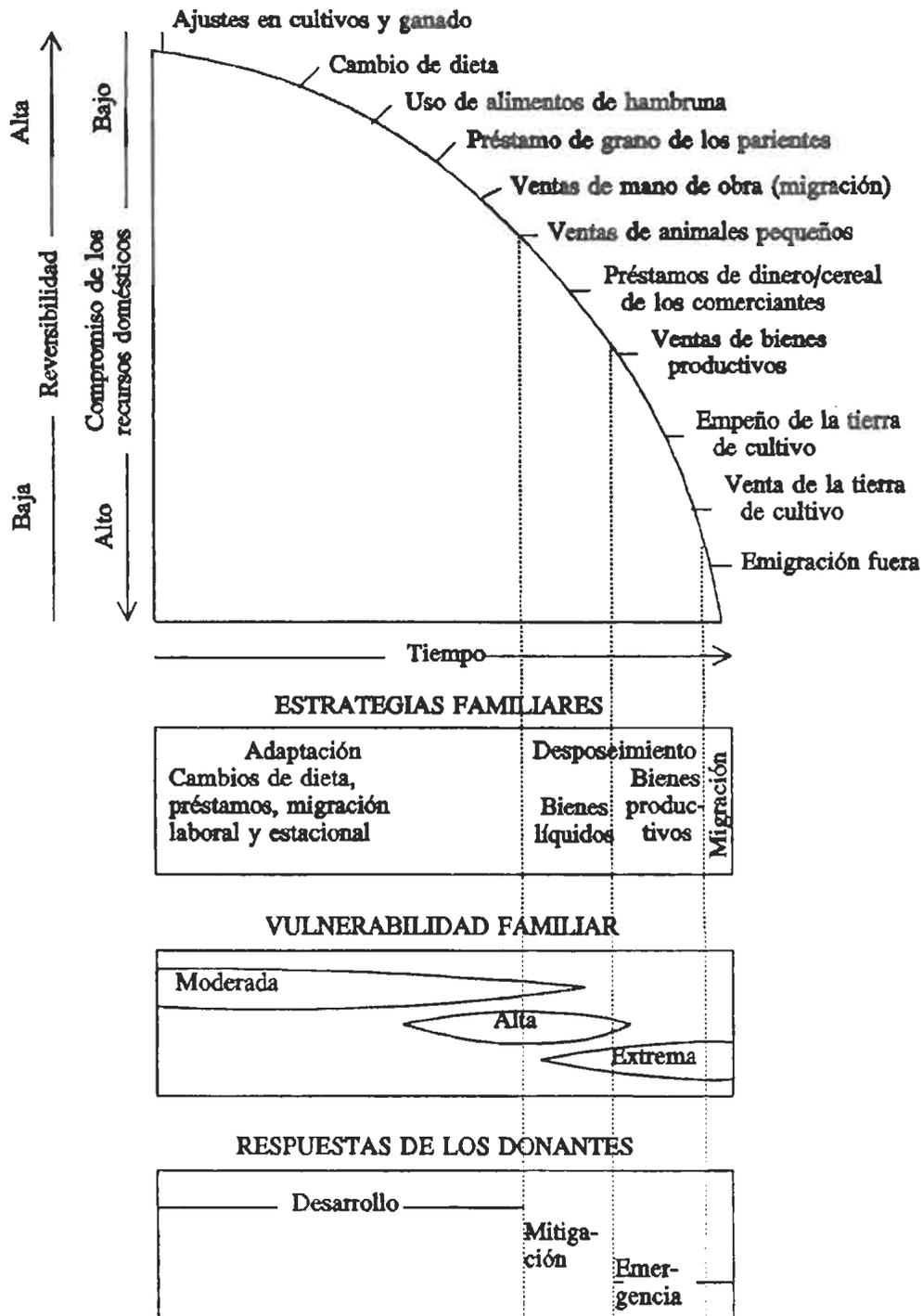
familiares ha sido recientemente incorporada a algunos de los *sistemas de alerta rápida* (SAR), que recogen datos diversos (pluviométricos, previsión de cosechas, precios, etc.) para detectar el inicio de las hambrunas. Cada nivel de vulnerabilidad, además, se corresponde con la necesidad de priorizar un tipo determinado de intervención por parte de la ayuda internacional: la moderada ha de ser respondida con intervenciones de desarrollo, la alta con medidas de mitigación de la crisis, y la extrema con ayuda de emergencia.

Ahora bien, algunos autores han realizado otra contribución decisiva a la redificación de la hambruna al subrayar que ésta no es sólo un proceso por el que algunos sectores sociales se empobrecen, sino también un proceso por el que otros se enriquecen a costa de los primeros. Algunos sectores poderosos (comerciantes, grandes agricultores, etc.) absorben los recursos de las víctimas arruinadas o que deben huir, comprándoselos a precios de saldo o simplemente despojándoles de ellos. De este modo, hay que analizar no sólo las estrategias de afrontamiento de los que pierden con la hambruna, como se ha hecho habitualmente, sino también las estrategias de presión económica, política o militar ejercidas por los beneficiarios para forzar dicha transferencia de recursos (Rangasami, 1985a:1748-1749). Desde esta perspectiva, la hambruna no es tanto la consecuencia inevitable de la crisis, sino más bien un objetivo deliberado, provocado y sostenido por determinadas fuerzas sociales.

En resumen, el nuevo enfoque formulado por De Waal, Rangasami y otros considera la hambruna como un proceso progresivo y relativamente prolongado de crisis socioeconómica, a partir de una situación preexistente de vulnerabilidad, que provoca la depauperación de unos sectores y el enriquecimiento de otros, y que sólo en su última fase da lugar (y no siempre) a un incremento de la mortalidad, pero motivada más por las epidemias que por la inanición.

El proceso de la hambruna responde a dos tipos de causas: (a) por un lado, una situación de *vulnerabilidad* preexistente, caracterizada frecuentemente por la pobreza y el hambre endémicas, que sirve de contexto en el que se incuban; (b)

**ESTRATEGIAS FAMILIARES FRENTE A LA HAMBRUNA
COMO INDICADORES DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD,
Y CORRESPONDENCIA CON EL TIPO DE AYUDA REQUERIDA**



Fuente: Office of Arid Lands Studies, Universidad de Arizona, en Frankenberger (1991:18).

Figura n° 1

INTEGRACION DE LOS CONCEPTOS DE CRISIS ALIMENTARIA COYUNTURAL Y ESTRUCTURAL

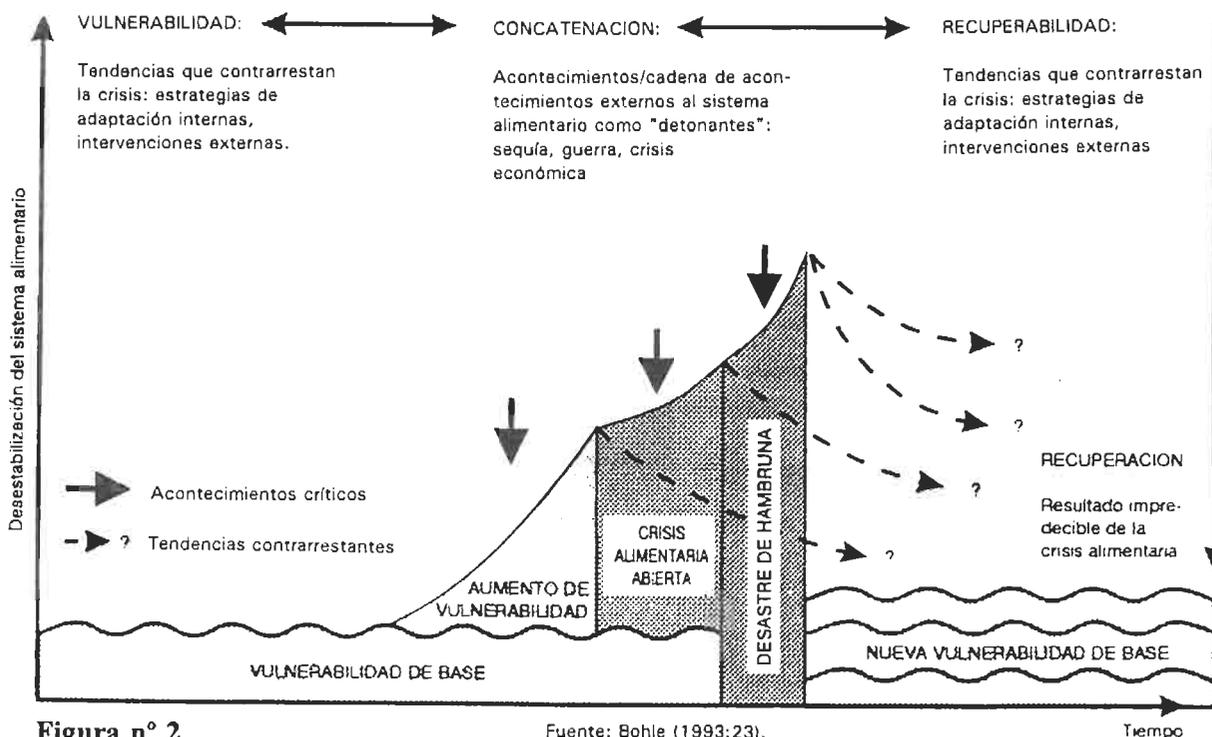


Figura nº 2

Fuente: Bohle (1993:23).

Tiempo

por otro diversos factores *detonantes* de la crisis alimentaria, como pueden ser las sequías, las guerras o las convulsiones económicas, cuyo impacto depende del nivel de vulnerabilidad de cada familia.

Por su parte, el grado de vulnerabilidad depende de dos factores: pobreza e indefensión. En efecto, las familias más vulnerables son las que carecen de un sistema de sustento que les permita resistir a la crisis y recuperarse tras ella, así como las que carecen de la protección de la seguridad social del Estado o de los diferentes mecanismos de solidaridad comunitaria propios de las sociedades tradicionales.

Entre los sectores más vulnerables en Africa se encuentran los campesinos y pastores pobres, los niños y ancianos, las mujeres (sobre todo las cabeza de familia) y sus familiares dependientes, así como los refugiados y desplazados. El origen de su vulnerabilidad se encuentra en un conglomerado de factores, muchos de ellos estructurales y duraderos. Unos son externos,

como la creciente marginación del continente respecto a la economía mundial, la deuda externa o el crecimiento de la brecha Norte-Sur. Otros son internos, como las políticas favorecedoras de las ciudades y la agricultura exportadora a costa de los pequeños campesinos, los perjuicios de las políticas de ajuste económico para el bienestar de la población, la falta de libertades civicopolíticas¹, la progresiva pérdida durante este siglo por parte de las mujeres de sus tradicional autonomía económica, así como el militarismo y los conflictos.

La vulnerabilidad no es estática, sino que aumenta conforme las estrategias de afrontamiento fracasan en su intento de mitigar la crisis. Como puede verse en la figura nº 2, el proceso de hambruna (crisis alimentaria coyuntural) constituye un aumento de la vulnerabilidad de base habitual (caracterizada con frecuencia por la pobreza y el hambre endémica, o crisis alimentaria estructural). Tal incremento viene motivado por diversos detonantes (acontecimientos críticos), y trata de ser neutralizado por las

¹ Sen (1992:2-9) subraya que nunca se ha desencadenado una hambruna en un país que disponga de prensa independiente y oposición política. Un buen ejemplo es la India desde su independencia (a diferencia de Africa), donde éstas han alertado de la aparición de las hambrunas y forzado a los gobiernos a atajarlas desde sus fases iniciales.

estrategias familiares y las intervenciones de ayuda (tendencias contrarrestantes). Cuando por fin acaba la hambruna, las familias afectadas no retornan a una situación idéntica a la anterior, sino que su nivel de vulnerabilidad de base es mayor: sus sistemas de sustento y recursos se han visto mermados, sus cuerpos han perdido defensas y su entorno ecológico probablemente ha sido degradado. El riesgo de sucumbir en la próxima crisis es por tanto mayor.

Tomando como base buena parte de las críticas a la teoría de las titularidades y de los enfoques recientes que acabamos de ver, De Waal (1989: 172-194; 1990:483-488) ha elaborado un interesante modelo explicativo de las hambrunas africanas, el *modelo de la crisis sanitaria*. En él integra no sólo el hambre (como hace Sen), sino también la miseria, así como la muerte motivada por las epidemias. Una pieza clave del esquema es la perturbación social, como desencadenante de dicha crisis sanitaria.

De este modo, diferencia dos tipos de hambrunas en Africa: las habidas en tiempos de paz (causadas por la sequía o la crisis económica), marcadas por la perturbación social, y que constituyen hambrunas moderadas y equiparables a una pobreza aguda; y las desencadenadas en tiempos de conflicto o violencia sistemática, marcadas por el colapso social, que pueden dar lugar a la inanición masiva (De Waal, 1990: 484-488).

Hambrunas en tiempos de paz (figura nº 3)

En este primer modelo, una convulsión externa (como un desastre natural o una crisis en la economía nacional) provoca una pérdida de las titularidades al alimento de los sectores vulnerables y una amenaza a su sistema de sustento, con la consiguiente perturbación social. Los afectados suavizan el impacto económico de la hambruna desplegando diferentes estrategias de afrontamiento, las cuales, sin embargo, pueden traducirse en un empobrecimiento progresivo (venta de bienes para comprar comida), al que puede ponerse freno mediante la ayuda alimentaria. En Africa, una estrategia fundamental para la subsistencia suele ser la emigración (permite buscar

trabajo, alimentos silvestres, ayuda familiar o mercados en los que vender), si bien acarrea también perjuicios que contribuyen a la crisis. En efecto, a veces erosiona las titularidades de los que emigran (abandono temporal de sus casas y tierras, con riesgo de daños o robo; muerte o saqueo del ganado en el camino), así como de las poblaciones que les acojen (la llegada de gente puede hacer bajar los salarios y subir los precios de los alimentos). Pero, sobre todo, las migraciones contribuyen a la perturbación social generada por la crisis económica y a precipitar la crisis sanitaria (propagación de epidemias por hacinamiento de personas en condiciones de insalubridad). La crisis sanitaria puede dar origen al aumento de la mortalidad, si bien las intervenciones en el campo de la salud pueden frenar su impacto.

Hambrunas con violencia sistemática y colapso social (figura nº 4)

El modelo anterior sufre un agravamiento radical cuando entre los agentes externos se encuentra la violencia sistemática. La violencia agota o imposibilita las estrategias de afrontamiento que, en condiciones normales, permiten a las comunidades subsistir a la sequía o la crisis económica, facilitando así que caigan en la miseria. La violencia, además, hace que la perturbación social degenera en un auténtico colapso social. De este modo, el acceso al alimento se ve dificultado por diferentes vías: robo o destrucción de bienes, quiebra de las comunidades y familias, riesgo en la recogida de alimentos silvestres, obstáculos al movimiento de personas, hundimiento de los mercados de trabajo temporal o pequeño comercio, etc. Además, el colapso social desbarata el sistema sanitario y precipita una crisis sanitaria más severa.

En este contexto de miseria y crisis sanitaria, acrecentadas por la dificultad de proporcionar ayuda humanitaria, el resultado puede ser la inanición aguda, la fase final y más grave de la hambruna. Esta fase es más fácil que se desencade, por tanto, en hambrunas asociadas a conflictos que en aquellas motivadas sólo por la sequía o factores económicos.

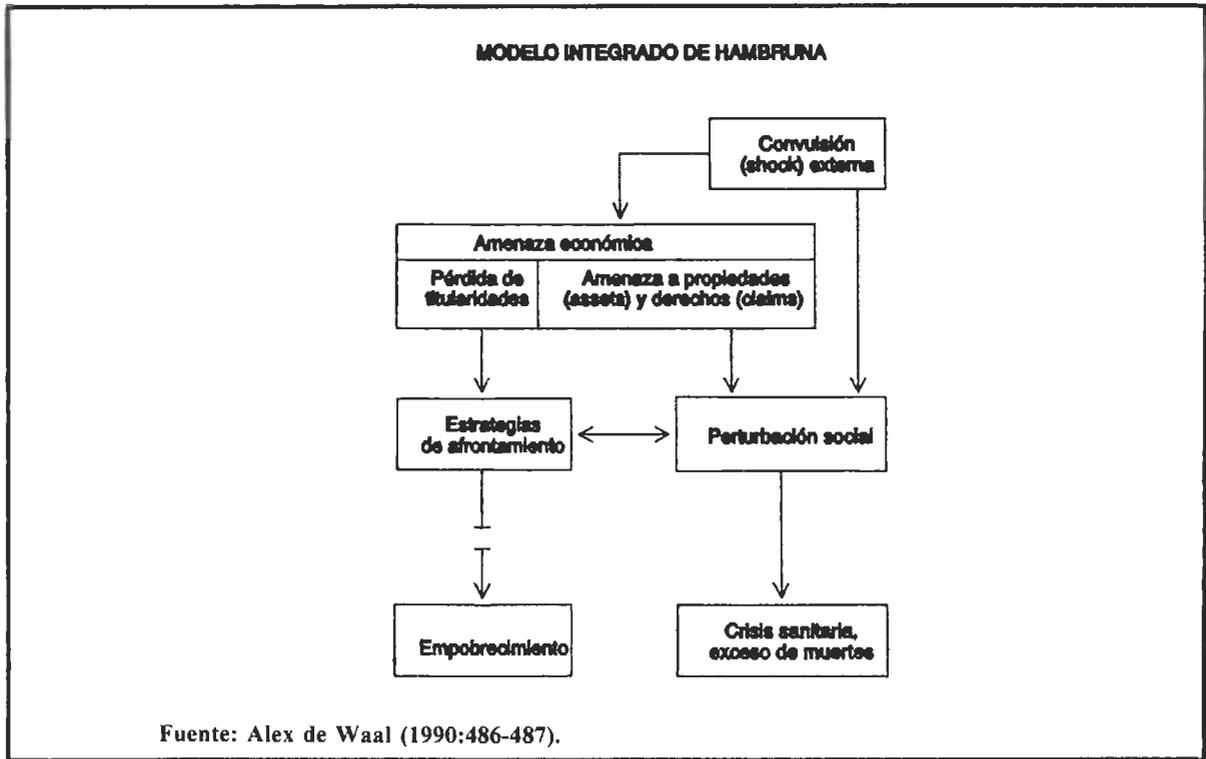


Figura n° 3

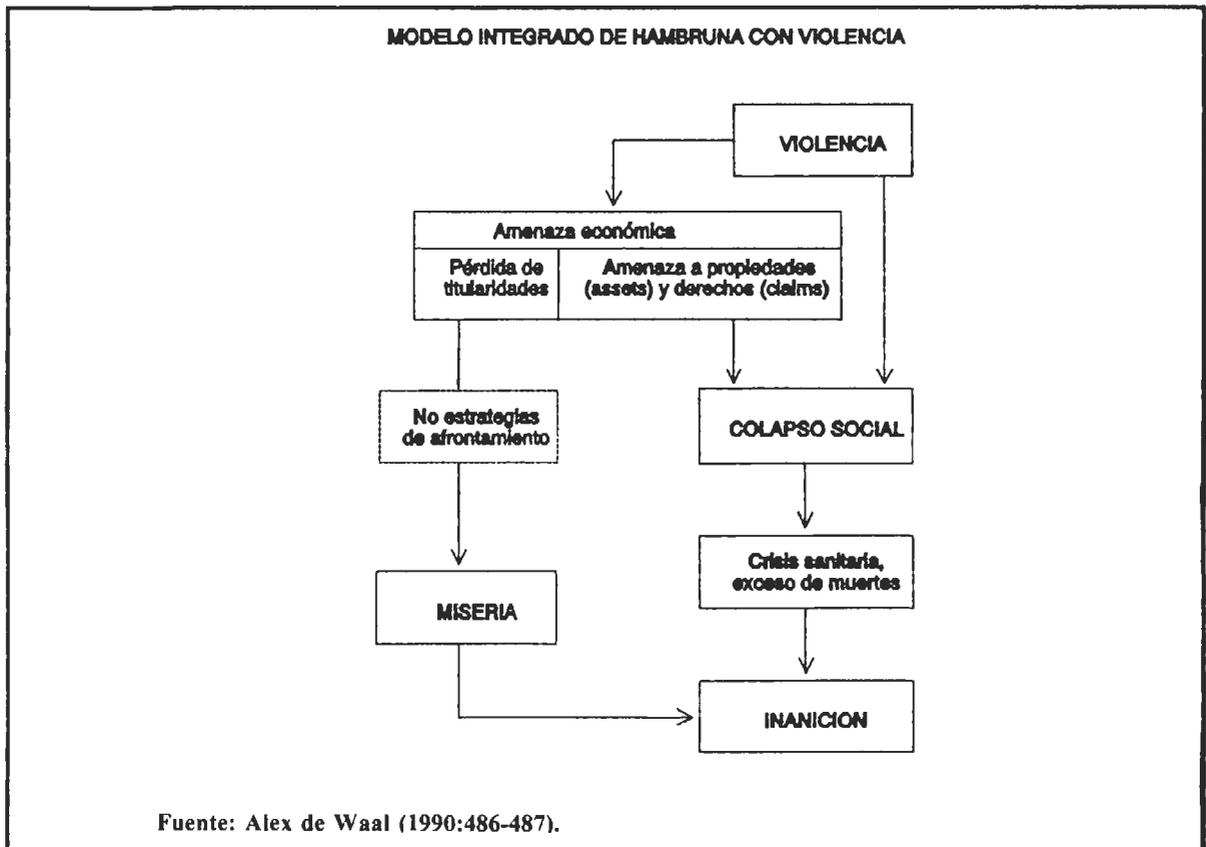


Figura n° 4

Este modelo de la crisis sanitaria, que incorpora muchas de las aportaciones de la bibliografía reciente, puede ser muy útil para explicar la dinámica de las hambrunas recientes del África Subsahariana, incluyendo la ruandesa de 1994.

Dado el reconocimiento que hace del papel de la violencia, nos resulta particularmente valioso para sistematizar las relaciones entre la guerra y las hambrunas, que vamos a ver a continuación.

2. MILITARISMO, GUERRA Y VULNERABILIDAD

Como acabamos de ver, el análisis de las hambrunas ha prestado una atención creciente al impacto de la violencia. Esto se debe, en buena medida, a la constatación de que la principal causa de las hambrunas africanas desde los años 80 ha sido más la guerra que la sequía. En efecto, según Moore y Collins (1988:17), de los 31 países afectados por la sequía en el África Subsahariana a principios de esa década, sólo padecieron hambruna 5, todos ellos en guerra (Mozambique, Angola, Sudán, Chad y Etiopía).

Por su parte, un estudio aludido por Reyna (1991:352-353) ha cuantificado la relación entre hambruna y guerra en el África Subsahariana (excluyendo Sudáfrica y Madagascar; en total 40 países) entre 1960 y 1990. En este período, de los 22 países que han sufrido alguna guerra, el 74% (14 países) han experimentado también hambrunas. Por otro lado, de los 13 que se libraron de la guerra, el 62% (8 países) no fueron afectados por la hambruna. Además, indica Duffield (1991:6), al menos la mitad de la población africana categorizada como alimentariamente insegura se ha visto afectada por la guerra de alguna forma.

Estas cifras prueban que la guerra tiene una incidencia decisiva en la hambruna en el África Subsahariana, aunque no pueda señalarse como causa única. Desde la década pasada, la hambruna (con muerte masiva) sólo se ha desencadenado en la región cuando a una crisis productiva por sequía se le ha sumado un

conflicto armado. Se trata de la «trinidad sequía-guerra-hambruna», en la que la guerra actúa como obstáculo a las medidas para combatir adecuadamente la sequía (Devereux, 1993: 152). Ahora bien, dado que las deficiencias en la producción y distribución alimentarias son endémicas en la región, en las presentes condiciones la guerra constituye prácticamente una condición suficiente para la hambruna (Green, 1992:1).

En cualquier caso, la relación entre la guerra y la hambruna no se limita sólo a los efectos del conflicto en sí, sino que ha de rastrearse también en lo que constituye uno de sus precedentes, esto es, la militarización de los presupuestos y de la política, así como en sus consecuencias tras el conflicto, como es la destrucción de las estructuras económicas y sociales. Todo ello contribuye a incrementar la vulnerabilidad al hambre.

En lo que se refiere a la militarización, ésta podría definirse como dos procesos que se refuerzan mutuamente: el aumento desmesurado de los gastos militares, y la injerencia del estamento castrense en asuntos políticos y económicos propios de la esfera civil. Según Fisas (1987: 20), tal proceso se produce cuando un Estado dedica más del 10% de su PIB a gastos militares.

En el marco de la Guerra Fría, muchos países africanos han dedicado cuantiosos recursos a los gastos militares. Según prueban informes como

los de Sivard (1992:34), tales desembolsos suelen acarrear dos perjuicios económicos inmediatos. Por un lado, fuerzan a reducir las partidas presupuestarias que potencian el bienestar y el desarrollo socioeconómico². De hecho, los países africanos más afectados por la hambruna en los 80 han tenido fuertes desembolsos militares, como Etiopía³, en contraste con otros de bajo gasto que se han librado de ella, como Kenia y Bostwana. En segundo lugar, la importación de armas representa una fuerte pérdida de divisas y contribuye al endeudamiento externo.

Junto a la militarización de los presupuestos habría que hablar también de la militarización de la política. Dada la falta de cuadros políticos y administrativos nativos, la descolonización abrió las puertas de la política a los militares en muchos países. Los ejércitos se convirtieron en la cantera de líderes, así como en el estamento burocrático con más peso y recursos, en conexión directa con los medios financieros y las redes de comercio de armas. Según Sivard (1992: 28), en 1960, el 26% de los países del Tercer Mundo recién independizados tenían alguna forma de dominio militar, mientras que en 1989-1990 representaban el 57%. Es decir, en 64 de los 113 países estudiados, las fuerzas armadas, nacionales y extranjeras, ejercían manifiestos poderes ejecutivos, judiciales y legislativos.

Los militares frecuentemente utilizan su poder político para incrementar los presupuestos de defensa, lo que contribuye a su vez a reforzar su capacidad de influencia y el proceso de militarización. En 1989, los gobiernos militares del Tercer Mundo dedicaban a gastos militares más del doble que los gobiernos civiles, manteniendo respectivamente 6,4 y 2,6 soldados por mil habitantes. Además, los países bajo control militar han padecido desde 1960 el triple de conflictos bélicos que el resto, con más de 14 millones de víctimas, 19 veces más que los controlados por civiles (Sivard, 1992:27-29).

² Una visión disidente es la de Looney (1988:323-324), quien afirma que la supuesta dicotomía de armas *versus* mantequilla en el Tercer Mundo se da sólo en los países en conflicto, mientras donde éste no existe se experimentan «diversas conexiones positivas entre los gastos de defensa y los socioeconómicos, importantes servicios públicos, educación, salud, seguridad social, carreteras y transporte», aunque la relación fue negativa en el caso de la agricultura.

³ Etiopía tuvo el mayor gasto militar per cápita del Africa Subsahariana en 1984, año en que experimentó una fuerte hambruna, dedicando el 46% del presupuesto nacional a armamento (Devereux, 1993:149); en 1990 sus guerras en Eritrea y Tigré absorbían más de dos tercios del presupuesto (Keller, 1992:615).

Nos interesa subrayar que el aumento de poder del estamento militar frecuentemente implica un incremento de la represión política, acompañada por la marginación de los intereses de los sectores pobres y el aumento de su explotación y su vulnerabilidad a la miseria y el hambre. En 1989-1990, de 64 países controlados por militares, en 32 se ejercieron de forma habitual la fuerza y la represión (torturas, desapariciones, etc.) contra sus pueblos, mientras que de los 49 controlados por civiles se ejercieron sólo en 9 (Sivard, 1992:27).

En este sentido, A. Sen (1991) apunta al autoritarismo como un factor favorecedor de las hambrunas durante las guerras, porque los regímenes dictatoriales y militarizados utilizan la guerra como excusa para impedir los partidos de oposición y la prensa independiente. De esta forma, la casta civil o militar dominante se refuerza, pero al mismo tiempo se insensibiliza más aún sobre el sufrimiento de las víctimas de la hambruna: acallando las críticas anula también las presiones que le instarían a adoptar políticas eficaces contra el hambre (subsidios, racionamientos, etc.). De este modo, en ese contexto autoritario la guerra alienta la hambruna por la superposición de dos procesos. Por un lado, la pérdida de recursos de amplios sectores sociales (mientras otros los incrementan), que les hace más vulnerables al hambre. Por otro, la destrucción de los *incentivos políticos* para adoptar políticas públicas que protejan los recursos de los más vulnerables.

En definitiva, concluye Sen (1991:16,20), la debilidad de las estructuras democráticas de muchas economías vulnerables, acentuada por las guerras y el militarismo, es una de las causas principales de las hambrunas modernas. Por consiguiente, éstas se han visto significativamente favorecidas en el Africa Subsahariana por el apoyo de ambos bloques durante la Guerra Fría a regímenes autoritarios.

3.

SUSTRATO LOCAL DE LOS CONFLICTOS AFRICANOS

Para comprender el impacto de los conflictos armados sobre la situación alimentaria es preciso analizar la naturaleza de aquéllos. En particular, es preciso subrayar que las guerras africanas, bajo su aparente dimensión nacional o internacional, esconden y utilizan como vehículo diferentes conflictos *tribales* tradicionales, muchos heredados de la época precolonial. De su dinámica se sabe aún poco, pero los antropólogos han tratado de darles una doble explicación en el marco de economías de subsistencia, según señalan Turton (1991:254, 259-261) y Duffield (1991:13):

a) como medio de adaptación ecológica: permitirían ajustar la población humana a los recursos y territorio disponibles y luchar por una base de recursos hoy decrecientes, adquiriendo nuevos territorios y desplazando a los anteriores ocupantes;

b) como medio de afirmación política y cultural: permitirían mantener al grupo como una unidad político-territorial diferenciada y autónoma (en ausencia de una unidad superior), afirmando su identidad e independencia de los demás y estableciendo con ellos unas relaciones reguladas por normas. No se trataría de una ruptura de las relaciones políticas normales, sino el cauce de su propio desarrollo.

Esta perspectiva implica que la relación entre la guerra y la vulnerabilidad al hambre no es tan simple como cabría pensar. En efecto, la guerra tribal tradicional constituye también un mecanismo para mantener los medios de vida, lo

cual, en un contexto de subsistencia, es la única forma para garantizar la supervivencia física y política como grupo.

Ahora bien, estos conflictos tradicionales entre linajes o comunidades solían carecer de un efecto destructivo o mortífero significativo. Aunque acompañados a veces del saqueo, su objetivo era no tanto la aniquilación, sino básicamente resaltar los derechos políticos de un grupo en un área, defendiendo o extendiendo el control sobre un territorio y sus recursos. La guerra tenía bastante de ritual sociorreligioso con regularidad casi estacional, constituyendo un sistema equilibrado y recíproco para ajustarse a los cambios económicos y medioambientales, así como para modificar fronteras y redefinir el equilibrio político entre las comunidades (Duffield, 1991:14; Chrétien, 1991:16-17).

Sin embargo, en tiempos recientes la guerra ha perdido ese papel de medio recíproco de ajuste y adaptación, convirtiéndose en una fuente de inestabilidad y destrucción de los medios de sustento. Uno de los principales factores del cambio ha sido el aumento de las desigualdades de poder entre los diferentes grupos étnicos, en parte debido al impacto del colonialismo sobre el equilibrio antes existente, así como, más recientemente, la disponibilidad de armas automáticas por parte de algunas comunidades, lo que ha multiplicado el efecto mortífero de los conflictos. También cabe destacar la creciente disputa, a veces violenta, por unos recursos naturales (agua, tierras, pastos) menguados por la sequía y la expansión de la agricultura comercial, que en muchos lugares ha acabado con la tradicional simbiosis entre agricultores y pastores (Duffield, 1991:15).

Como bien señala Platteau (1990:367-368), las rivalidades interétnicas fueron exacerbadas en gran medida por los poderes coloniales para aumentar el control sobre sus súbditos, otorgando concesiones o privilegios en base a la filiación tribal. Esta práctica ha sido continuada por los Estados africanos independientes, los cuales privilegian a los grupos tribales que constituyen su base de apoyo, repartiendo prebendas o cargos administrativos y priorizando las inversiones en sus zonas, contribuyendo así a los desequilibrios regionales. En suma, el reforzamiento de la conciencia étnica se ha empleado como el mejor medio para asegurar una clientela política. Uno de los ejemplos al caso es el de Ruanda. En ésta, según De Waal (1994:1-2), la colonización belga rompió las relaciones de reciprocidad entre hutus y tutsis, imponiendo el dominio de los segundos y fomentando los agravios que han dado lugar a la conflictividad durante las últimas décadas y al reciente genocidio de 1994⁴.

Sin embargo, esto no quiere decir que las filiaciones étnicas sean siempre una dimensión esencial de los Estados africanos. Lo que sí constituye su denominador común es el estructurarse en base a redes o facciones rivales arti-

culadas en base a diferentes factores: individuos, familias, grupos religiosos, socioculturales y económicos, castas y otros. Estas facciones están frecuentemente inmersas en despiadadas luchas por el acceso al poder, para detentar con él privilegios y controlar recursos y riquezas⁵.

Los conflictos locales alcanzan su mayor poder destructivo cuando se integran políticamente en guerras mayores, a escala nacional, aliando y polarizando a los grupos étnicos. En efecto, los conflictos tribales frecuentemente sirven como cauce de las guerras civiles africanas, de modo que los grupos étnicos suelen corresponderse a facciones políticas determinadas, unas veces sustentando al Estado y otras nutriendo grupos rebeldes. De este modo, tales guerras, como la que enfrenta al norte con el sur de Sudán, han tenido como objeto la destrucción de los medios de vida de los grupos étnicos oponentes, como medio de neutralizarlos y amenazar su propia subsistencia. El escenario se ha complicado aún más por cuanto no sólo los conflictos locales han dado cuerpo a guerras civiles internas, sino que además éstas han sido utilizadas como piezas de ajedrez de la rivalidad internacional (Duffield, 1991:16-17).

⁴ De Waal (1994:1-2) niega la extendida interpretación de que el problema ruandés sea expresión de animosidades tribales ancestrales. Tras siglos de convivencia, compartiendo lengua, religión y territorio, en la época precolonial los tres grupos del país (hutus, tutsis y pigmeos) no eran tribus o grupos étnicos, sino más bien estratos del mismo grupo, diferenciados por su estado ocupacional y político, con relaciones de reciprocidad. Estas relaciones fueron quebradas por la administración colonial belga, que reforzó sus diferencias y priorizó a los tutsis. De particular trascendencia fue la introducción en 1926 de un carné de identidad personal que especificaba el grupo de pertenencia: el criterio para ser definido como tutsi (grupo prioritariamente ganadero) consistió en ser poseedor de diez o más vacas.

⁵ Véase BAYART, J. F. (1989), *L'Etat en Afrique: la politique du ventre*, Fayard, París, pp. 261-280, citado por Platteau (1990:368).

4.

GUERRA, ECONOMIA PARALELA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Para comprender el impacto de las guerras africanas contemporáneas sobre las hambrunas, es preciso examinar algunas características de aquéllas. Hay que partir de la base de que no se trata de guerras campales entre ejércitos respetuosos con la población civil, sino de conflictos con un sustrato étnico local en los que es difícil diferenciar las nociones "soldado" y "civil". Esto condiciona los medios de lucha y de subsistencia de los contendientes, convirtiéndolos en desencadenantes de las hambrunas. En efecto, "la economía política de la guerra interna depende de controlar, incapacitar o destruir por modos diversos las economías de semisubsistencia" (Duffield, 1991:17-18, 30-31).

En primer lugar, el principal objetivo de las estrategias militares es la destrucción de los mecanismos de obtención de alimentos del enemigo (tanto sus medios de vida de semisubsistencia habituales como sus estrategias de afrontamiento de la crisis), lo cual contribuye a precipitar la hambruna. Dado que en un contexto de semisubsistencia la pervivencia política de un grupo depende directamente del mantenimiento de sus medios de sustento, para sojuzgarle políticamente es preciso destruir éstos o apropiarse de su base de recursos.

En segundo lugar, la comida y el sustento no son sólo un arma de guerra para sojuzgar al enemigo, sino también una necesidad y objetivo de los propios contendientes. El abastecimiento se garantiza sobre el terreno, por lo que, lejos de ser una preocupación sólo de los encargados de la intendencia, constituye el determinante básico de la dinámica del conflicto interno, de la

economía política de la violencia (obtención de recursos, red de apoyos, etc.).

Ahora bien, recientemente se ha puesto de relieve que comprender la relación entre guerra y hambruna en Africa exige examinar también otro aspecto convencionalmente no contemplado: la función estructural de la violencia como instrumento para la transferencia de recursos de los sectores vulnerables hacia otros poderosos, a través de los canales de la economía paralela.

En efecto, la continuación en la post-Guerra Fría de los conflictos internos en muchas partes de Africa ha alentado el surgimiento de un nuevo análisis de las emergencias complejas. Como ya comentamos, tal enfoque interpreta la hambruna como un resultado posible de un proceso de empobrecimiento derivado de la transferencia de bienes de los débiles a los políticamente fuertes. Los métodos para arrebatarse tales bienes van desde la presión a través del mercado (compra de propiedades a precios de saldo) hasta la apropiación violenta. Muchas guerras, por tanto, tendrían como función la de alentar dicho proceso.

Un importante instrumento para tal transferencia consiste en la despoblación forzosa de determinadas zonas, mediante la cual los militares y las élites pueden apropiarse de los recursos de los desplazados: acceden a sus recursos naturales (tierra, minerales, petróleo), usurpan o compran a precios de saldo sus propiedades, les explotan como mano de obra barata, y controlan la ayuda que se les envía. De este modo, "la migración masiva ha sido frecuentemente una

consecuencia buscada de una hambruna artificialmente creada". Dos buenos ejemplos son la hambruna de Tigré en 1983-1985, con su emigración masiva a Sudán, y la del sur de Sudán en 1988, que provocó migraciones masivas al norte del país y a Etiopía (Keen y Wilson, 1994:210-211).

Dado que la violencia facilita la transferencia de recursos, los poderosos recurren frecuentemente a movilizar el sectarismo étnico, nacional o religioso para alentar aquélla y legitimar la usurpación del oponente. En este sentido, el genocidio que ha acompañado al desmantelamiento armado de bienes en Sudán y Somalia es comparable con la limpieza étnica de la antigua Yugoslavia, señala Duffield (1994:52).

Ya que dicha transferencia de bienes, especialmente cuando se usa la violencia, suele ser extralegal, su comercialización se lleva a cabo a través de los circuitos de la economía paralela. Esta ha aflorado en Africa como respuesta al hundimiento de la economía formal y al amparo de la corrupción oficial, y se ha dicho que su toma en cuenta en las estadísticas habría elevado el PNB de Sudán o Somalia en más de un 40%. Los mercados paralelos pueden ser muy sofisticados, con amplios circuitos nacionales (reforzados en los 80 por los cauces utilizados por refugiados y desplazados para comercializar la ayuda recibida) e internacionales (redes de contrabando panafricanas de divisas, metales preciosos, productos animales, etc.) (Duffield, 1992:1-7).

Se trata de redes complejas, extendidas y bien establecidas, que interconectan la transferencia local de bienes con redes nacionales e internacionales, culminando en la fuga de capitales. Son controladas por empresarios y políticos con relaciones a alto nivel (Duffield, 1994:55-56), que se benefician de la hambruna y del conflicto. De hecho, basándose en su poder local, con frecuencia han llevado a cabo prácticas que promueven deliberadamente la escasez y que socavan o paralizan los programas de ayuda.

Las redes paralelas, al ser generalmente extralegales, son propensas al uso de la violencia para el mantenimiento y control de sus medios (como los recursos logísticos o las líneas de comunicación). Dado que suelen estar controladas por grupos étnicos o sectores del Estado, sus luchas de intereses frecuentemente se traducen en conflictos intergrupales, entre grupos y el Estado, o dentro del Estado mismo. Muchas guerras africanas recientes, como la de clanes en Somalia, esconden en realidad rivalidades entre las redes de economía paralela (Duffield, 1992:4-5).

Por su parte, Alex de Waal (1992:2-3) subraya que el impacto negativo de la economía paralela y de la violencia sobre la situación alimentaria tiene que ver también con una progresiva degradación de las estrategias militares en Africa. Estas son básicamente de tres tipos:

a) *Estrategia de contrainsurgencia convencional*: basada en ejércitos regulares de conscriptos.

b) *Estrategia de contrainsurgencia irregular*: que emplea milicias o grupos paramilitares en apoyo al ejército. El gobierno las coordina y frecuentemente las arma pero, al no estar retribuidos, recurren al saqueo.

c) *Anarquía o caos*: caracterizada por la lucha de diferentes grupos armados que no llegan a ejercer ninguna forma reconocible de control gubernamental sobre el territorio o la población. Pueden tener aspiraciones de gobernar, pero carecen de control central, sus acciones son indisciplinadas y viven del saqueo.

Según señala, últimamente los gobiernos del Cuerno de Africa, y probablemente de todo el continente, están cambiando de la estrategia "a" a la "b", y ésta conduce a la "c" si no es detenida, como ha ocurrido en Somalia⁶. Este paradigma de anarquía, instaurado en Mogadiscio en 1992, con su quiebra de las estructuras

⁶ Somalia es el ejemplo más llamativo de esta transición, desde la contrainsurgencia convencional en el norte del país en 1988, a través de la contrainsurgencia irregular basada en milicias de clanes en 1988-1989, hasta la anarquía instaurada en 1991-1992.

SUDAN: UN EJEMPLO DE GUERRA Y HAMBRUNA CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Uno de los mejores ejemplos de vinculación entre conflictos locales y nacionales, así como de hambruna motivada por la violencia con el objeto de transferir recursos hacia sectores poderosos, lo proporciona Sudán, con el reavivamiento en 1983 de la guerra entre los árabes del norte y los negros del sur. En 1985, el gobierno proporcionó armas modernas a los pastores árabes baggara para que atacaran a los dinka, etnia mayoritaria del sur vista como apoyo potencial de los rebeldes del SPLA. Ambos grupos mantienen disputas tradicionales sobre los derechos de pastos, agudizadas recientemente por una merma de la base de recursos en el norte que empujaba a los primeros hacia el territorio de los segundos. Pero el rearme de una de las partes acabó con el equilibrio tradicional y convirtió el conflicto no en un medio de adaptación sino de destrucción masiva.

Al armar a los baggaras para atacar a los dinka, el gobierno instrumentalizó a los primeros con varios objetivos. En primer lugar, ganarse su lealtad, prometiéndoles un botín con el que compensar la pérdida de ganado que habían sufrido en la sequía de 1984-1985. En segundo lugar, recuperar el lucrativo comercio de ganado dinka realizado por comerciantes y oficiales del ejército, amenazado desde los años 70, relanzando así la economía informal cuando la formal se había hundido en los 80. Y, en tercer lugar, abrir el sudeste del país a la explotación comercial árabe, ganando acceso al petróleo recién descubierto en el sur, con el cual sanear la balanza de pagos y frenar el aumento de la deuda externa.

El proceso se canalizó a través de un conflicto interétnico y sectario, en el que la reislamización del Estado sirvió como legitimización para marginar políticamente a los pueblos del sur (cristianos y animistas) y desposeerles de sus bienes. La hambruna sirvió así tanto de estrategia de contrainsurgencia como de fuente de beneficios para la economía paralela. Su desarrollo fue, en consecuencia, el resultado de cuatro tipos de prácticas:

- a) Las incursiones con saqueo, a veces combinadas con tácticas de tierra quemada, que entre 1985 y 1988 destruyeron los medios de sustento de los dinka, quemando sus campos, robándoles su ganado y arrojándoles a la miseria. Decenas de miles de ellos fueron asesinados, esclavizados o forzados a huir. Se dio lugar así a una masiva transferencia de recursos del sur hacia el norte (ganado y mano de obra, fuera de emigrantes o de esclavos).
- b) La distorsión deliberada de los precios, con el desplome de los del ganado y la subida de los del grano. Los comerciantes, entre los que se encontraban muchos militares, se beneficiaron así por partida doble. Por un lado, exportaban ganado hacia el norte, fuera arrebatado o comprado a precio de saldo por el miedo de los dinka a las incursiones de saqueo, patrocinadas a veces por los mismos comerciantes. Por otro, vendían el grano a precios artificialmente altos, pues el ejército restringía el suministro a las ciudades para impedir que bajaran.
- c) La desviación masiva de la ayuda internacional (como la enviada a los dinka), así como su obstaculización por parte de los grupos poderosos, con objeto de mantener altos los precios y de evitar una presencia de ONGs que hubiera dificultado las incursiones. Así, se sobornó a trabajadores ferroviarios para no cargar la ayuda en los trenes, al tiempo que el ejército solía demorar durante meses los envíos a zonas del sur con la excusa de no poder proporcionar escolta.
- d) Las restricciones oficiales impuestas por el ejército a las estrategias de afrontamiento, como la recogida de alimentos silvestres o la emigración, que forzaba a las víctimas a depender de las condiciones abusivas del mercado.

Como consecuencia, los dinka sufrieron una de las hambrunas recientes más mortíferas. Según Médicos Sin Fronteras, durante su fase álgida, en un período de nueve semanas entre finales de junio y mediados de agosto de 1988, en el campo de Meiram (sur de Kordofan) un desorbitado 7,1% de la población moría cada semana (Keen, 1994:111). Privados de su patrimonio económico y cultural, y dependientes de la incertidumbre de la ayuda internacional, prácticamente han desaparecido como entidad socioeconómica semiindependiente, al igual que otros muchos grupos de Sudán.

Fuentes: Duffield (1990:19-31; 1992:26; 1994:55); Africa Watch (1990:81-91); Keen (1994:111-116).

económicas y políticas y el pillaje de bandas militares, constituye un contexto propicio para el desarrollo de la economía paralela.

Como vemos, los conflictos internos en Africa se articulan no sólo en base a ejércitos regulares, sino también en función de otras instituciones armadas locales que podríamos englobar bajo el concepto de *señores de la guerra* (*war-lordism*)⁷. Se trata de grupos locales, étni-

camente estructurados, que asumen un papel político-militar en un período de decadencia del poder central y de reducción en la base de recursos. Suele adoptar dos formas diferentes de organización político-militar: los *grupos*, con meras aspiraciones regionales, y los *movimientos*, constituidos por el apoyo de diferentes grupos locales, con aspiraciones a veces nacionales⁸.

⁷ El concepto *war-lordism* fue inicialmente acuñado para describir la situación en China durante los años 20, caracterizada por un desmoronamiento institucional y decadencia del poder central que encumbró fuertes liderazgos político-militares de base local o regional que ansiaban expandir sus áreas de influencia (Duffield, 1991:18).

⁸ Entre los *grupos* se puede citar a las milicias pro-gubernamentales de Sudán, o a *Inkhata* (de base zulú) en Sudáfrica. Algunos de los *movimientos* más importantes serían el SPLA del sur de Sudán, la RENAMO de Mozambique (ahora convertido en partido político tras la pacificación del país) y la UNITA de Angola (Duffield, 1992:18).

5.

TACTICAS MILITARES PROPICIATORIAS DE LA HAMBRUNA

Las hambrunas recientes más severas han sido aquellas provocadas como arma de guerra. El hambre se ha utilizado para ganar apoyos y reforzar a los seguidores, así como para desmoralizar y debilitar a los oponentes. Las actitudes y las estrategias seguidas al respecto han sido muy diversas⁹.

Por lo general, en todas las guerras los contendientes persiguen la interrupción de los suministros alimentarios de las tropas enemigas. La diferencia está, como señala Green (1992:2, 9), en cuánto daño se está dispuesto a causar a la población civil para asegurar ese resultado. La UNITA angoleña y la RENAMO mozambiqueña, por ejemplo, han tenido claramente como estrategia el desbaratamiento de la producción en las zonas bajo control gubernamental, en el primer caso sembrando minas y en el segundo mediante incursiones destructivas y, generalmente, mortíferas. Por otro lado, la forma en que los contendientes se abastecen también puede ser desastrosa para la situación alimentaria de la población. Así, por ejemplo, la RENAMO obtenía sus suministros robando en dichas incursiones a las zonas gubernamentales, exigiendo tributos, así como esclavizando mano de obra para la producción de alimentos.

Uno de los casos recientes más claros de hambruna motivada por la guerra es la del sur de Sudán en 1986-1989, causada por las políticas adoptadas tanto por el gobierno como por el rebelde SPLA. Mientras el primero armaba a milicias y fuerzas paramilitares (como los baggara) que asolaban el campo, los segundos asediaban ciudades en poder gubernamental para forzar su rendición¹⁰. Al mismo tiempo, unos y otros empleaban tácticas de *tierra quemada* así como la negación del alimento a los civiles en zonas de conflicto (obstrucción de la ayuda, del comercio de alimentos y de las estrategias familiares contra el hambre) (Africa Watch, 1990:103). También el ejército de Etiopía usó ampliamente la táctica de *tierra quemada* durante los años 80 para impedir el abastecimiento de los independentistas de Tigré y Eritrea, mediante el arrasamiento de cultivos con bombas incendiarias y de napalm, y el bombardeo de granjas y almacenes (Keller, 1992:614-623).

Por otro lado, diferentes prácticas de contrainsurgencia, orientadas a imponer el máximo control a una población potencialmente hostil, pueden también incrementar la vulnerabilidad a la hambruna:

⁹ Diferentes informes de la organización Africa Watch (1990, 1991, 1992) analizan en detalle el uso del alimento como arma de guerra y otras violaciones de los derechos humanos en los conflictos de Sudán, Etiopía, Mozambique y Somalia.

¹⁰ El sitio de ciudades, aislándolas de sus zonas abastecedoras de alimentos, puede constituir el caso más puro de hambruna por descenso de la disponibilidad de alimentos, en el que el problema no es ni la sequía ni la miseria. El bloqueo de las ciudades holandesas durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial generó una hambruna con 10.000 víctimas, cuyo estudio ha ayudado a comprender las fases del proceso de deterioro biológico de las víctimas. A este respecto cabe citarse la obra de BURGER, G. C. E., J. C. DRUMMOND, y H. R. SANDSTEAD (eds.), *Malnutrition and Starvation in Western Netherlands, September 1944-July 1945*, General State Printing Office, La Haya, 1948. Ver también Devereux (1993:159-161).

a) El desplazamiento forzoso de la población civil y su reubicación en *pueblos protegidos* o *zonas seguras*, con la pretensión en realidad de impedir su apoyo material o humano a las guerrillas, mediante una estricta vigilancia (toques de queda, patrullas, minado de las entradas). Ha sido empleada particularmente por los ejércitos Uganda, Etiopía, Angola y Mozambique¹¹, pero también por grupos rebeldes como UNITA y RENAMO en esos dos últimos países. Además, gobiernos como los de esos dos últimos países han aprovechado la ayuda internacional destinada a este tipo de desplazados¹².

b) El control y restricción del comercio, particularmente de alimentos, que contribuyó a la generación de la hambruna etíope en los años 80. En el centro y sur del país se debió a razones de planificación socialista, pero en las zonas rebeldes del norte tuvo carácter de lucha contrainsurgente (confiscación de grano

y animales, bombardeos aéreos sistemáticos de los mercados en las zonas rebeldes, etc.). El consiguiente aumento de los precios alimentarios contribuyó a precipitar y agudizar la hambruna (Africa Watch, 1991:150-152).

c) El control estricto del movimiento de la población, que obstaculiza las actividades económicas y las estrategias familiares para afrontar el hambre. Así, por ejemplo, la exigencia de permisos de viaje para salir del pueblo contribuyó a la hambruna de los 80 en Etiopía (Africa Watch, 1991:152-154).

En definitiva, estas prácticas de contrainsurgencia aumentan la vulnerabilidad a la hambruna de la población, porque le impiden su autoabastecimiento y le someten a una situación de dependencia plena respecto a la fuerza que controle el suministro de alimentos. Cuando esto se combina con la sequía y con los obstáculos al movimiento o a la obtención de ayuda, la hambruna encuentra allanado el terreno.

¹¹ El gobierno etíope ha recurrido reiteradamente a estos procedimientos. Los programas de reasentamiento de los años 80 afectaron a unas 600.000 personas, que, con el supuesto objetivo de protegerlas contra la hambruna, fueron trasladadas desde las regiones del norte hacia otras más fértiles y menos pobladas. En realidad, se trató de una táctica para privar de apoyos a los rebeldes de Eritrea y Tigré, así como para extender la colectivización masiva y los cultivos comerciales. Los desplazamientos mermaron la producción agrícola y toda actividad económica, degradaron ecológicamente las zonas de asentamiento y obstaculizaron las estrategias de afrontamiento habituales (Endale, 1992:37-38; Keller, 1992:619-620). Paralelamente, el gobierno desarrolló un plan para concentrar en poblados a los desplazados así como a la población dispersa, que afectó a unos 13 millones de personas. Aunque el objetivo oficial era facilitar el acceso a los servicios sanitarios y educativos, éstos fueron muy deficientes y las condiciones de vida y abastecimiento se volvieron pésimas, lo que costó unas 50.000 vidas. La pretensión real era convertir los nuevos asentamientos en cooperativas agrícolas y en centros de reclutamiento militar (Keller, 1992:619-620; Africa Watch, 1991:227).

¹² Las agencias prestan ayuda a estas personas desposeídas y dependientes, especialmente cuando los desplazamientos se han justificado como medidas de protección frente a los bandidos o la sequía. Esto le permite al gobierno liberar unos recursos que puede así emplear en intensificar su campaña de contrainsurgencia y, en cierta medida, legitimar ésta con factores humanitarios (De Waal, 1993:38).

6.

PERJUICIOS DE LA GUERRA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Como hemos señalado, la guerra es el factor predominante en la generación de la hambruna en el Africa Subsahariana, pues ataca a la seguridad alimentaria en todos los frentes a la vez. En primer lugar, deteriora las titularidades y los medios de sustento de los sectores vulnerables, por cuanto parte de sus recursos son destruidos o transferidos a los poderosos mediante la economía paralela, y la práctica de las estrategias de afrontamiento se vuelve impracticable. En segundo lugar, cercena el abastecimiento de alimentos mediante la destrucción de las cosechas o reservas, la disminución del número de productores agrícolas y la obstaculización del comercio y la ayuda externa. Además, la violencia exacerba la perturbación social propia de las crisis alimentarias, convirtiéndola en un auténtico colapso social que promueve el éxodo de la población, la quiebra de los servicios básicos y la crisis sanitaria. Detallemos a continuación las principales vías por las que la guerra promueve la inseguridad alimentaria.

6.1. Freno para el desarrollo económico

En primer lugar, las pérdidas económicas derivadas del conflicto implican un freno al desarrollo económico del país, y con ello a la seguridad alimentaria de su población. Según cálculos provisionales de Green (1992:3-4), el crecimiento del PNB y la producción alimentaria del Africa Subsahariana a fines de los 80 podría haber sido un 2% anual mayor en ausencia de conflictos armados. Esta región ha perdido unos 150.000 millones de dólares en su PNB entre 1980-1990 a consecuencia de la guerra, lo

que representa una abundante merma de producción, mercados y empleos.

Angola, por ejemplo, experimentó en ese período una pérdida de 42.250 millones de dólares en su PNB, quedando éste en 1990 en la mitad del nivel probable si no hubiera habido guerra. Mozambique perdió 22.800 millones de dólares, quedando su PNB en el 44% del probable. En el lado opuesto, aquellos países que durante los 80 se han librado de la guerra (como Zimbabue, Zambia y Tanzania) han experimentado un aumento en la producción y en el acceso a los servicios básicos, junto a una disminución de la pobreza (Green, 1994:42).

6.2. Destrucción de los alimentos y de los recursos para producirlos

La guerra implica la pérdida de grandes cantidades de alimentos, así como de los recursos para producirlos. Esto se debe, por una parte, al requisamiento o simple pillaje por los combatientes para su propio sustento. Por otra, a la destrucción y ocupación de tierras que acompaña inevitablemente a la guerra (destrucción de cultivos, deforestación, campamentos y trincheras, bombardeos, etc.). Pero, además, frecuentemente se recurre a la destrucción deliberada del alimento como una forma de sojuzgar al enemigo, con su máximo exponente en la táctica de *tierra quemada*. Por otro lado, una de las prácticas más perniciosas es la instalación de minas antipersonales, tanto por sus costes humanos (muertes y amputaciones) como económicos sobre la agricultura y el transporte, que

perduran largo tiempo incluso ya alcanzada la paz.

El impacto destructivo del conflicto sobre la situación alimentaria depende de su intensidad, duración y tácticas empleadas (particularmente de si el objetivo es destruir la base productiva del enemigo). Pero también depende de las características de la producción agropecuaria, ya que determinados cultivos son especialmente vulnerables y destruibles. Es el caso de cereales como el maíz, que arde fácilmente, mientras que los productos hortícolas lo hacen menos. Los alimentos más seguros son las raíces, como la mandioca (requiere poco cultivo, puede cosecharse en un período prolongado, y sólo puede destruirse excavando), que ha salvado la vida a miles de mozambiqueños (Green, 1992:4).

Por su parte, el ganado es muy vulnerable (necesita atención continua, pastos y agua; y se mata o ahuyenta fácilmente), y la reconstrucción de la cabaña requiere un largo tiempo, por todo lo cual los pastores constituyen un sector de alto riesgo. La muerte de un animal de carga, como un burro o un camello, representa más trabajo para las mujeres en el acarreo del agua y la leña, o tener que pagar más cara la comida transportada desde mercados distantes. En Eritrea, durante la primera mitad de los 80, la guerra y la sequía redujeron la cabaña ganadera a una cuarta parte, y entre 1987 y 1991 ésta se redujo de nuevo a la mitad. La pérdida masiva de bueyes, en particular, parece haber sido la principal causa de la disminución de la producción alimentaria. Las 24.000 familias que se quedaron sin ningún buey cayeron en el

MINAS ANTIPERSONALES E INSEGURIDAD ALIMENTARIA

La plantación bajo tierra de minas antipersonales constituye una de las tácticas militares con efectos más perniciosos y duraderos sobre la seguridad alimentaria de muchos países, perturbando gravemente su vida económica y social. En el África Subsahariana existen entre 18 y 30 millones: Angola tiene unos 15 millones; Mozambique, Somalia y Sudán un millón cada uno, y Etiopía medio millón (Alonso, 1995:22).

Las minas impiden la explotación de las tierras de cultivo y los pastos, socavando la producción y los medios de vida de la población rural, contribuyendo con ello a su empobrecimiento y éxodo. En Angola, por ejemplo, impiden el aprovechamiento de miles de hectáreas de tierra fértil en el valle de Mavinga. Del mismo modo, suelen provocar serias pérdidas entre el ganado.

El miedo a las minas obstaculiza además la puesta en práctica de las estrategias de afrontamiento con las que las familias resisten a la hambruna, como la búsqueda de alimentos silvestres, la emigración o el comercio. En efecto, uno de sus objetivos prioritarios son las vías de comunicación, como carreteras y puentes, con lo que limitan seriamente el movimiento de personas y mercancías. Las minas contribuyen al sabotaje económico también mediante la inutilización de fábricas e infraestructuras, como ocurrió con la importante central eléctrica de Cabora Bassa, en Mozambique. Igualmente, entre sus objetivos figuran clínicas y escuelas, e incluso a veces cementerios, con hondos perjuicios psicológicos al cortarse la comunicación de la comunidad con sus difuntos.

Con frecuencia, las minas hieren y amputan más que matan, con el objeto de sobrecargar los servicios sanitarios. En Angola han sufrido amputaciones entre 20.000 (según Naciones Unidas) y 70.000 personas (según Médicos Sin Fronteras), lo que representa uno de cada 500 ó 145 habitantes respectivamente. Los lisiados se ven muchas veces impedidos para realizar una actividad laboral, representando una carga familiar y social, y viéndose abocados a la miseria. En el caso de las mujeres, en muchas culturas no son consideradas aptas para el matrimonio.

Las minas tienen una vida a veces de décadas, con lo que sus efectos se prolongan incluso más allá de la firma de la paz. De este modo, suponen un importante obstáculo al proceso de reconstrucción y desarrollo, así como al reasentamiento de los refugiados y desplazados, que con frecuencia ven sus tierras inutilizables. Las operaciones de desminado son lentas, parciales, arriesgadas y costosas: si una mina cuesta entre 800 y 30.000 ptas, desactivarla cuesta entre 35.000 y 120.000 ptas. Por último, desde 1992 una campaña internacional reclama la prohibición de las minas, ya que violan abiertamente la legislación internacional humanitaria al acarrear efectos indiscriminados y tener por objetivo a la población civil.

Fuentes: Alonso (1995); Human Rights Watch (1994); IFRD and RCS (1994).

empobrecimiento y la dependencia respecto a quienes los conservaron, pues el alquiler de una pareja exigía el pago de un tercio de la cosecha (Cliffe, 1994:66-9).

6.3. Destrucción de servicios e infraestructuras

Otro de los medios por los que la guerra promueve el hambre y la miseria es la destrucción y perturbación de las precarias infraestructuras y servicios sociales. Grupos como RENAMO y, en menor medida, UNITA han tenido como objetivo prioritario la destrucción de los servicios de salud, agua, transporte y educación, con el objeto de socavar el apoyo popular al gobierno mozambiqueño y angoleño respectivamente, que, desde la independencia, habían conseguido importantes avances en esos campos. En Mozambique, para 1988 más de dos millones de personas (incluyendo 800.000 niños) habían sido privadas de atención sanitaria, y para 1993 habían sido destruidos u obligados a cerrar cerca de 1.000 puestos de salud, el 48% del total. Como consecuencia, para fines de 1992 la malnutrición se cree que afectaba al 50% de la población, frente al 17% en 1983 (Vincent, 1994: 85-86).

Estas prácticas contribuyen también a limitar la producción de alimentos: el incremento de la morbilidad merma la mano de obra productiva (enfermos y familiares que los cuidan), a la vez que la necesidad de desplazarse fuera de la aldea para recoger agua reduce el tiempo de trabajo productivo (Green, 1987:28). La destrucción de la infraestructura de transportes, por su parte, supone un serio obstáculo para el reparto de la ayuda.

Del mismo modo, la perturbación del sistema educativo tiene consecuencias perniciosas a medio y largo plazo: reduce el PNB del futuro y corta una salida a la pobreza para muchas familias. Generaciones enteras de niños han sufrido a escala masiva la destrucción de escuelas o la huida de los maestros de las zonas inseguras en países como Mozambique, Angola, Sudán y Uganda.

6.4. Disminución de la proporción entre productores y consumidores de alimentos

La guerra impone una carga a la seguridad alimentaria también en términos demográficos, por cuanto parte de la población deja de ser productora de alimentos para ser alimentariamente dependiente (militares, heridos, desplazados y refugiados). Este drenaje de unos alimentos de por sí escasos refuerza la inseguridad alimentaria de los sectores más vulnerables de la población (niños, ancianos y, frecuentemente, mujeres).

La merma de mano de obra agrícola se ve acrecentada por el hecho de que las guerras africanas tienen una base fundamentalmente rural y de que su impacto afecta de forma abrumadoramente mayoritaria a los civiles. En Eritrea, por ejemplo, en 1991 el 15% de los hombres adultos no eran laboralmente activos por hallarse en el frente, a lo que habría que sumar los refugiados y desplazados (Cliffe, 1994:164). Por otro lado, entre 1980 y 1990 murieron en relación con la guerra en el Africa Subsahariana más de 5 millones de personas (1,9 millones en la zona sur y unos tres en el Cuerno de Africa), la mayoría niños de menos de cinco años o ancianos, generalmente refugiados o desplazados (Green, 1992:1-2). En Angola y Mozambique sólo el 5% de los muertos eran combatientes (Green, 1987:26).

El efecto mortífero de las guerras se ve acrecentado por el papel de los ejércitos como difusores de enfermedades. Algunos de los principales epicentros de los casos de SIDA en Africa coinciden con áreas donde los ejércitos han estado de campaña unos pocos años antes (como el suroeste de Uganda tras la ocupación tanzana de 1979) (De Waal, 1993:34). Además de las muertes, es reseñable el gran número de lisiados por amputaciones a causa de la explosión de minas antipersonales, que además han condenado a comunidades enteras a una permanente inmovilidad económica.

6.5. Degradación medioambiental

Los conflictos bélicos originan serios daños medioambientales, bien por acción o por omisión, que contribuyen a menguar la base de recursos para la producción de alimentos. Las propias acciones bélicas causan muchos de ellos, como la deforestación en la línea del frente o los incendios por bombardeos (De Waal, 1993:34). Pero posiblemente sea más pernicioso el hecho de que un gobierno en guerra no suele estar en disposición de proteger un medio ambiente amenazado por la erosión o la sequía. Por otro lado, si la guerra genera degradación medioambiental, también es cierto que ésta estimula los conflictos, como el existente entre pastores y agricultores en el Sahel por un suelo que se desertiza y un agua escasa.

6.6. Obstaculización del movimiento de alimentos y personas

Otra contribución de la guerra a la generación del hambre consiste en la obstaculización de los flujos de alimentos hacia las zonas necesitadas, sean en forma comercial o de ayuda de emergencia.

Una de las prioridades de los conflictos internos suele ser la destrucción de los centros de mercado (como su bombardeo en Eritrea y Tigré por la aviación etíope) y de las líneas de transporte (como el minado de carreteras en Angola y Mozambique). Esto da lugar a la destrucción de los mercados, la desintegración de la economía rural formal y el aumento de la inseguridad alimentaria.

La ayuda alimentaria también se ve afectada por el corte o el peligro en las rutas de transporte, así como por la falta de información fidedigna y rápida sobre las necesidades en las zonas en conflicto. Esto suele convertirla en escasa en

volumen, deficiente en su distribución, tardía en su llegada y problemática en cuanto a su contabilidad. Además, la ayuda alimentaria es a veces utilizada como un arma más del conflicto: donación a una de las partes para favorecerla, impedimento por el gobierno de su distribución en zonas rebeldes (Green, 1992:5-6), o, incluso, requisamiento por el ejército para alimentar a la tropa y promover el reclutamiento¹³.

También el movimiento de personas resulta con frecuencia muy limitado, sea por la inseguridad reinante o por las restricciones impuestas por la lucha contrainsurgente. Esto dificulta seriamente el empleo de diferentes estrategias familiares para combatir el hambre (comercio, emigración, recolección de alimentos silvestres y otros que exigen movilidad). Estas estrategias también se ven obstaculizadas por la división de las familias (por reclutamiento, huida, etc.) y el consiguiente debilitamiento de las redes sociales y familiares de ayuda mutua.

6.7. Alteración de las relaciones sociales y de género

Los procesos bélicos suelen convulsionar las estructuras sociales a diferentes niveles. En primer lugar, suelen dar lugar a variaciones en el estatus económico o de poder de unos grupos respecto a otros. El impacto de la guerra, como el de la hambruna, afecta más a unos sectores que a otros (por ejemplo, los asalariados urbanos corren menos riesgos que los pastores, dependientes de un bien tan vulnerable como el ganado). Pero tal impacto no es sólo diferenciado sino que, además, sigue tendencias divergentes: en la economía de guerra, la ruina de unos suele verse acompañada por el enriquecimiento de otros. En esta evolución dispar del poder adquisitivo, los grupos más desfavorecidos suelen ser aquellos cuya contribución no es necesaria a la guerra, por lo que tienden a ser ignorados por el gobierno (Sen, 1991:11, 13).

¹³ La General Accounting Office de EE.UU. estimó en 1986 que en algunos lugares de Somalia sólo llegaba a los destinatarios el 12% de la ayuda alimentaria internacional, siendo buena parte del resto confiscada por el ejército o sus milicias afines. Fenómenos similares se han dado durante los 80 en las hambrunas del norte de Etiopía, Mozambique, sur de Sudán y muchos otros lugares (De Waal, 1993:33). En Etiopía, el ejército confiscó parte de la ayuda alimentaria de emergencia que comenzó a enviarse en octubre de 1984, con objeto de alimentar y pagar a los soldados, inducir a la población a enrolarse e incrementar el poder del ejército, al tiempo que se usaba la fuerza para impedir su distribución a los rebeldes de Eritrea y Tigré (Keller, 1992:621, 624; Africa Watch, 1991:177).

En algunos Estados africanos, generalmente militarizados y en situaciones de guerra civil, los grupos dirigentes han conformado una auténtica «cleptocracia». Es decir, han usado su poder para despojar sistemáticamente y por la fuerza a la población de sus propiedades (particularmente tierras y ganado). Un ejemplo prototípico es Zaire. De forma similar, militares y hombres de negocios se han enriquecido con las expropiaciones de tierras en el sur de Sudán para crear granjas comerciales, que han aumentado una clase de jornaleros muy vulnerables a la hambruna (De Waal, 1993:38-39).

Los conflictos bélicos tienen efectos devastadores también sobre las relaciones familiares, generacionales y de género. Su impacto sobre las mujeres, por ejemplo, suele incrementar la subordinación de éstas y amenazar tanto su subsistencia como la de los familiares a su cargo. La marcha de los hombres a la guerra incrementa las obligaciones de aquéllas como sustento de la familia, pero frecuentemente no se les reconoce el pleno control de los recursos (uso de la tierra, negociación de créditos, etc.). Además, la necesidad les empuja a veces a desempeñar actividades socialmente inaceptables, como el trabajo fuera de casa, la venta de drogas y alcohol, o la prostitución. Su subsistencia y su función como sustento familiar también se ven amenazadas por el coste del conflicto para su salud física y mental (destrucción de servicios sanitarios, estrés psicológico por las nuevas cargas familia-

res en ausencia de los maridos, etc.). Las víctimas de violaciones (realizadas a veces como táctica militar) y de prostitución forzada por los militares, no sólo sufren traumas psicológicos sino que además ven amenazada a largo plazo su seguridad económica (y la de sus hijos), debido al rechazo social o familiar, la incapacidad para emparejarse e, incluso, el contagio del SIDA (El Bushra y Piza-López, 1994:82-185).

Por su parte, los niños ven truncados su crecimiento y formación, de manera particularmente dramática en el caso de los llamados *niños soldados* (Dodge y Raundalen, 1991). Incluso se ha constatado la reaparición de la esclavitud en Sudán y Mozambique, tal y como indican los informes de Africa Watch. La guerra, en última instancia, diluye los fundamentos de la sociedad¹⁴.

A pesar de todo, en determinados casos, la destrucción y el desorden que la guerra genera pueden proporcionar la ocasión para avances sociales importantes. En lugares como Eritrea, Tigré o la RASD del Frente Polisario, se han creado instituciones y organizaciones de talante participativo con las que, por ejemplo, las mujeres han ganado mayor peso socioeconómico (derechos de participación política, desempeño de nuevas actividades económicas y formación). Esto ha sido posible en contextos en los que combatientes y civiles se han compenetrado y han compartido objetivos de liberación.

¹⁴ En palabras de Cornwell (1991:75), «la destrucción, frecuentemente sin sentido, de la vida y las propiedades y el uso militar del terror socavan el sentido del valor y de la dignidad de la humanidad. La guerra destruye los sistemas de valores religiosos y otros, y pueden provocar que sociedades enteras se hundan en el fatalismo».

7.

CONCLUSIONES: IMPLICACIONES PARA LA AYUDA INTERNACIONAL

La creciente importancia que han adquirido las emergencias complejas en Africa (Sudán, Somalia, Ruanda, etc.) desde los años 80 se ha traducido en un aumento de los recursos orientados a la ayuda de emergencia, a veces a costa de la de desarrollo. A pesar de ello, las intervenciones humanitarias de la comunidad internacional han revelado su fracaso a la hora de afrontar tales emergencias complejas.

Este fracaso es imputable a la escasa atención que la comunidad internacional presta a la mitigación, resolución y, sobre todo, prevención de los conflictos, a lo que contribuyen diferentes factores. Uno de ellos tiene que ver con las limitaciones del sistema de Naciones Unidas, que fue creado para garantizar la paz y seguridad de los Estados, concebida ésta en base a la integridad territorial, y responder a las crisis cuando surgieran. En consecuencia, no está adecuadamente dotado ni para prevenir los conflictos, ni para intervenir en los de carácter interno. En segundo lugar, también cabría señalar la reticencia de los gobiernos del Norte a gastar en la prevención de conflictos que no preocupan a sus opiniones públicas ni amenazan su seguridad. Pero, ante todo, la comunidad internacional no ha tenido éxito en la prevención y mitigación de las emergencias complejas debido a que prima una concepción errónea de su naturaleza y dinámica: se ignoran los factores estructurales que las crean y mantienen, así como la relación entre la guerra y la hambruna.

Un primer problema consiste en que todavía sigue teniendo peso el modelo convencional de hambruna, concebida como un fenómeno

repentino de inanición y aumento de la mortalidad, que centra así la atención en lo que en realidad es sólo su última fase y pierde de perspectiva el proceso de su gestación.

En segundo lugar, cuando sí se reconoce que la hambruna consiste en un proceso, éste se comprende con frecuencia sólo de forma parcial. En efecto, la comunidad internacional suele afrontar las hambrunas como crisis medioambientales y económicas, que provocan el empobrecimiento de los vulnerables, no como convulsiones sociales y políticas en las que, además, algunos sectores se enriquecen. Como han subrayado diferentes autores desde fines de los 80, la violencia inherente a las emergencias complejas es un instrumento que contribuye a que unos grupos ganen y otros pierdan. De este modo, la hambruna ha sido en varios casos (Etiopía, Sudán, Somalia, Angola, Mozambique) no una consecuencia indeseada de la guerra, sino su objetivo militar y también económico, por cuanto ha posibilitado el despojo de los enemigos y desplazados.

La comunidad internacional, que durante la Guerra Fría ha analizado los conflictos básicamente en su dimensión externa, no presta aún suficiente atención a su lógica e intereses a nivel local, con lo que no llega a identificar los factores que perpetúan la violencia. En particular, sigue sin considerar los mecanismos extralegales de la economía paralela, que despojan de sus recursos a los sectores vulnerables para transferirlos a los poderosos (apropiación de bienes de los desplazados, desviación de la ayuda de emergencia, etc.), y que exacerban las

tensiones étnicas o religiosas con tales fines. Estas deficiencias en la concepción de las emergencias complejas (junto a otros factores) contribuyen a la deficiente respuesta internacional que se les ha dado.

La tendencia a centrarse en la última fase de las hambrunas implica que se suele actuar tarde, mediante intervenciones nutricionales y de salud que buscan salvar vidas, pero pocas veces detener el proceso de empobrecimiento y evitar el éxodo.

Además, al no considerarse la complejidad de los factores subyacentes a la emergencia compleja, no se afrontan sus causas profundas ni su dinámica, sino simplemente sus síntomas. De

este modo, las intervenciones de socorro suelen consistir en la provisión de bienes materiales y servicios (comida, salud, cobijo), pero no suelen afrontar el proceso de crisis socioeconómica y política (pérdida de la base de sustento de los vulnerables, desestructuración social, quiebra del Estado), y, en particular, la transferencia de recursos mediante la economía paralela.

El no afrontamiento de estos factores subyacentes que marcan la dinámica interna del conflicto ha contribuido al fracaso de la mayoría de las intervenciones de las Naciones Unidas. Estas parecen haberse centrado en objetivos que se han revelado insatisfactorios, como promover las elecciones en Angola (que no impidieron el

EL FRACASO DE LA OPERACION DE AYUDA A SOMALIA

La Operación Restaurar la Esperanza, dirigida a Somalia en diciembre de 1992, representa el más claro fracaso de las respuestas dadas por las Naciones Unidas a las emergencias complejas.

Desde finales de los 80, la guerra vino acompañada por saqueos masivos y extorsiones por parte de las milicias, tanto para su sustento como para beneficio de sus generales, siendo la ayuda internacional uno de sus objetivos. Hasta finales de 1992, la asistencia extranjera apenas penetró en el interior del país, donde la mayoría de las iniciativas de socorro eran locales. Por el contrario, durante 1991 y 1992, las agencias de Naciones Unidas fracasaron estrepitosamente al plantearse su trabajo en clave meramente logística, debido a su inflexibilidad e incapacidad para aprender de las organizaciones locales y de su personal somalí.

En ese contexto, la intervención militar de diciembre se basó en una comprensión superficial de la realidad del país, y fue justificada en base a informaciones inciertas: por ejemplo, el exagerado cálculo de que el 70 u 80 % de la ayuda alimentaria era saqueada, o la injustificada previsión de que dos millones de personas estaban al borde de la muerte por inanición, cuando la hambruna estaba ya remitiendo.

La intervención fracasó por ignorar las condiciones políticas y económicas locales, en particular la interrelación entre los clanes y las redes de economía informal, con lo que no se orientó a las raíces del problema. En su lugar, se asumió simplistamente que la solución de la hambruna estaba en la ayuda alimentaria, y que la de los problemas políticos llegaría con los marines norteamericanos. Al mismo tiempo, se ignoraron los programas de ayuda que organizaciones locales, como la Media Luna Roja, llevaban gestionando con éxito desde hacía dos años. En consecuencia, la intervención permitió cortar la extorsión de las milicias a las agencias de socorro, pero tuvo una escasa contribución en la superación de la hambruna, que había remitido desde la cosecha de setiembre, y contra la cual resultaron más efectivas las estrategias familiares de afrontamiento. Por el contrario, degeneró en choques entre los marines y las milicias del general Aidid.

La intervención militar en Somalia asentó varios precedentes. La fuerza expedicionaria (UNITAF), liderada por EEUU de diciembre a mayo, fue el primer caso de ocupación militar justificada únicamente en base a razones humanitarias. La Operación de Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM II), de mayo en adelante, representó el primer caso de utilización de tropas de Naciones Unidas bajo el capítulo VII de la Carta de esa organización, que autoriza el empleo de la fuerza para hacer la paz. "Somalia se convirtió así en un experimento, en un tubo de ensayo internacional en el que los instrumentos del nuevo orden mundial pudieran ponerse a prueba." (p. 155)

Fuente: De Waal (1994:139-158)

rebrote del conflicto) o la captura del general Aidid en Somalia.

La prioridad para la ayuda internacional debería consistir, por tanto, en tratar de proteger las estrategias de afrontamiento de los vulnerables y de frenar los mecanismos por los que sus recursos son transferidos a quienes controlan las redes de economía paralela, deteniendo el proceso de empobrecimiento y evitando su éxodo.

A tal fin, sería útil que la comunidad internacional abordara las emergencias complejas como una violación masiva de los derechos humanos (tales como el derecho a la vida o al alimento). Las prácticas que despojan a los vulnerables de sus sistemas de sustento podrían tal vez mitigarse mediante el establecimiento de un sistema de vigilancia de violaciones de los derechos humanos, su denuncia por parte de las ONGs y la presión política de los donantes de ayuda. Esta forma de intervención de la comunidad internacional, hasta el momento apenas empleada, sería muy probablemente más efectiva y beneficiosa en términos humanos y económicos que la mera provisión de ayuda material.

Por otro lado, es preciso también tomar medidas a fin de que la ayuda misma no contribuya a perpetuar las emergencias complejas e, incluso, a reforzar la violencia de los poderosos, destruyendo más de lo que salva. Esto puede darse, por ejemplo, cuando se utiliza como pago de las tropas, cuando los gobiernos en guerra obtienen divisas aplicando impuestos a los insumos de socorro, o cuando se **desplaza forzosamente a la población para atraer la ayuda**. Igualmente negativo puede resultar el que se distribuya mediante mecanismos creados al efecto por los donantes o las ONGs, evitando las estructuras locales, lo cual socava la capacidad de gestión de éstas para afrontar crisis en el futuro. Esta situación ha sido señalada por Hanlon (1991) para el caso de Mozambique en los años 80. El reto, por otra parte, consiste en potenciar mecanismos por los cuales la ayuda humanitaria sirva para la disminución de los conflictos, por ejemplo apoyando a grupos no beligerantes, aplacando focos de conflicto (étnicos, religiosos o políticos), o promoviendo la democracia y los derechos humanos.

Otro dilema que plantean las emergencias complejas tiene que ver con las implicaciones que para la ayuda internacional encierran los principios de soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos de los Estados. Estos principios han sido habitualmente esgrimidos por los gobiernos en guerra para impedir el envío de ayuda a las zonas controladas por los rebeldes. Las Naciones Unidas, por ejemplo, están obligadas (resoluciones 43/131 y 45/100) a obtener permiso del gobierno en cuestión para poder movilizar la ayuda humanitaria, lo cual le ha restado operatividad en los conflictos internos y obstaculizado el trabajo con los gobiernos rebeldes no soberanos. Sin embargo, se han dado algunas experiencias de cierta flexibilidad en este sentido, como la Operación Lifeline que suministró ayuda al sur de Sudán en 1989. La cuestión, en definitiva, suscita una disyuntiva entre la soberanía estatal y los derechos humanos.

Por otro lado, hay que constatar el hecho de que el sistema internacional de ayuda humanitaria está recurriendo de forma creciente a canalizar la ayuda a través de las ONGs, lo cual, junto a indudables ventajas, suscita también algunos interrogantes. Una de ellas es el peligro de que puedan estar convirtiéndose en meras ejecutoras de las líneas de actuación marcadas por los donantes que les financian, y que esta función les impida afrontar las causas profundas del conflicto y, en particular, denunciar las violaciones de derechos humanos. Un segundo problema reside en que las ONGs, con frecuencia, no responden de su actuación ante los gobiernos africanos, sino sólo ante sus financiadores.

Otra cuestión controvertida en relación a la ayuda en emergencias complejas tiene que ver con su distribución en campos en los que se agrupa a la población receptora. Las agencias de ayuda suelen preferir este procedimiento porque facilita el reparto, la cuantificación de los beneficiarios y la estimación de resultados, y quizá también porque la hace más visible a los medios de comunicación. Sin embargo, diferentes autores critican la concentración de las víctimas, pues el hacinamiento propaga las epidemias al tiempo que obstaculiza su actividad económica. Además, puede servir de excusa a los desplazamientos forzosos de civiles por parte del

gobierno, a fin de controlarles como práctica contrainsurgente.

Es importante tener también en cuenta que los efectos de la emergencia compleja se arrastran tras la paz, y que por tanto es preciso que la ayuda perdure, ahora para contribuir a la fase de rehabilitación, esto es, de reconstrucción tanto física como económica y social.

En conclusión, es preciso que la comunidad internacional asuma que las emergencias complejas no son desgracias en las que el sufrimiento se reparte por igual, sino procesos en los que muchos pierden pero algunos ganan; y que reoriente sus intervenciones de ayuda con el objetivo de frenar las violaciones de derechos humanos y las prácticas que despojan a las familias vulnerables de sus recursos.

BIBLIOGRAFIA

AFRICA WATCH (1990), *Denying 'the Honor of Living'. Sudan. A Human Rights Disaster*, An Africa Watch Report, Nueva York.

AFRICA WATCH (1991), *Evil days. Thirty Years of War and Famine in Ethiopia*, An Africa Watch Report, Human Rights Watch, Washington y Londres.

AFRICA WATCH (1992), *Conspicuous Destruction: War, Famine and the Reform Process in Mozambique*, An Africa Watch Report, Londres.

AFRICA WATCH & PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS (1992), *Somalia. No Mercy in Mogadishu. The Human Cost of the Conflict and the Struggle for Relief*, Nueva York y Boston.

ALONSO OLLACARIZQUETA, Lucía (1995), *Enemigos invisibles, campos de muerte. Las minas antipersonal*, Informe del Centro de Investigación para la Paz (Madrid) y del Seminario de Investigación para la Paz (Zaragoza), nº 13.

BANCO MUNDIAL (1986), *La pobreza y el hambre. Temas y opiniones sobre la seguridad alimentaria en los países en desarrollo*, Washington D.C.

BOHLE, Hans-G. (1993), «The Geography of Vulnerable Food Systems», en BOHLE, H. G., T. E. DOWNING, J. O. FIELD y F. N. IBRAHIM (eds.), *Coping with Vulnerability and Criticality: Case Studies on Food-Insecure People and Places*, Freiburg Studies in Development Geography, Verlag breitenbach Publishers, Saarbrücken, pp. 15-29.

CHRETIEN, Jean-Pierre (1991), «Les racines de la violence contemporaine en Africa», en *Politique Africaine*, 42 (*Violence et pouvoir*), junio, Karthala, París, pp. 15-27.

CLIFFE, Lionel (1994), «The Impact of War on Food Security in Eritrea: Prospects for Recovery», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 160-179.

CORNWELL, Richard (1991), «War and the Decline of Africa», *Africa Insight*, vol. 21, nº 2, The Africa Institute of South Africa, Pretoria, pp. 74-77.

DE WAAL, Alexander (1989), *Famine that Kills. Darfur, Sudán, 1984-1985*, Oxford University Press, Oxford.

DE WAAL, Alexander (1990), «A Re-assessment of Entitlement Theory in the Light of the Recent Famines in Africa», *Development and Change*, vol. 21, nº 3, julio, Institute of Social Studies, La Haya, pp. 469-490.

DE WAAL, Alexander (1992), «Types of Warfare and Famine in the Horn: Comments on John Ryle's Paper», en MacRAE et al. (1992).

DE WAAL, Alexander (1993), «War and Famine in Africa», *New Approaches to famine, IDS Bulletin*, vol. 24, nº 4, octubre, Brighton (G.B.), pp. 33-40.

DE WAAL (1994), «Dangerous Precedents? Famine Relief in Somalia 1991-93», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 139-159.

DEVEREUX, Stephen (1993), *Theories of Famine*, Harvester Wheatsheaf, Londres.

DODGE, Cole P. y Magne RAUNDALEN (1991), *Reaching Children in War. Sudan, Uganda and Mozambique*, Sigma Forlag y Scandinavian Institute of African Studies, Bergen (Noruega) y Uppsala (Suecia).

DUFFIELD, Mark (1990), «Sudan at the Crossroads: From Emergency Preparedness to Social Security», *IDS Discussion Paper*, n° 275, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton (G.B.), mayo.

DUFFIELD, Mark (1991), *War and Famine in Africa*, Oxfam Research Paper n° 5, Oxfam Publications, Oxford.

DUFFIELD, Mark (1992), «Notes on the Parallel Economy, Conflict and Disaster Relief in the Post-Cold War Era», en MacRAE et al. (1992).

DUFFIELD, Mark (1994), «The Political Economy of Internal War: Asset Transfer, Complex Emergencies and International Aid», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 50-69.

DUFFIELD, Mark, Joanna MacRAE y Anthony ZWI (1994), «Conclusion», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 222-232.

EL BUSHRA, Judy y Eugenia PIZA-LOPEZ (1994), «Gender, War and Food», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 180-193.

ENDALE, Derseh (1992), *The Ethiopian Famines, Entitlements and Governance*, World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU/WIDER), Helsinki.

FISAS ARMENGOL, Vicenç (1987), «Gasto militar y subdesarrollo social» en CIP (Centro de Investigaciones para la Paz), *En la guerra. Antología de la Revista «Papeles para la Paz»*, Ediciones del Valle S.A., Zaragoza.

FRANKENBERGER, Timothy R. (1991), «The Importance of Household Coping Strategies to Famine Mitigation», en OFFICE OF ARID LANDS STUDIES, *Famine Mitigation. Proceedings of Workshops held in Tucson, Arizona, May 20-May 23, 1991 - Berkeley Springs, West Virginia, July 31-August 2, 1991*, Office of Arid Lands Studies, The University of Arizona, Tucson, Arizona, noviembre, pp. 15-24.

GREEN, Reginald Herbold (1987), «Killing the Dream: The Political and Human Economy of War in Sub-Saharan Africa», *IDS Discussion Paper*, n° 238, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton (G.B.), noviembre.

GREEN, Reginald Herbold (1992), «Conflict, food and famine. Reflections on Sub-Saharan Africa» en MacRAE et al. (1992).

GREEN, Reginald Herbold (1994), «The Course of the Four Horsemen: Costs of War and its Aftermath in Sub-Saharan Africa», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 37-49.

HANLON, Joseph (1991), *Mozambique. Who Calls the Shots?*, James Currey & Indiana University Press, Londres y Bloomington (Indiana).

HUMAN RIGHTS WATCH/AFRICA (1994), *Landmines in Mozambique*, Nueva York.

INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES, *World Disasters Report, 1994*, Ginebra, Suiza, 1994.

KEEN, David (1994), «The Functions of Famine in Southwestern Sudan: Implications for Relief», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 111-124.

KEEN, David y Ken WILSON (1994), «Engaging with Violence: A Reassessment of Relief in Wartime», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 209-221.

KELLER, Edmond J. (1992), «Drought, War, and the Politics of Famine in Ethiopia and Eritrea», *The Journal of Modern African Studies*, 30, 4, Cambridge University Press, pp. 609-624.

LOONEY, Robert E. (1988), «Africana. Military Expenditures and Socio-economic Development in Africa: A Summary of Recent Empirical Research», *The Journal of Modern African Studies*, 26, 2, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 221-231.

MacRAE, Joanna, Celia PETTY, Joanna WHITE y Anthony B. ZWI (eds.) (1992), *Conflict and International Relief in Contemporary African Famines. Report of a meeting convened by Save the Children Fund (UK) and Health Policy Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Save the Children Fund & HPU-LSHTM, Londres, 26 de marzo.*

MacRAE, Joanna y Anthony ZWI (eds.) (1994a), *War and Hunger. Rethinking International Responses to Complex Emergencies*, Zed Books & Save the Children Fund (UK), Londres.

MacRAE, Joanna y Anthony ZWI (1994b), «Famine, Complex Emergencies and International Policy in Africa: An Overview», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 6-36.

MAXWELL, Simon y Timothy R. FRANKENBERGER (eds.) (1992), *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements. A Technical Review*, UNICEF-IFAD, Nueva York-Roma.

MOORE LAPPÉ, Frances y Joseph COLLINS (1988), *World Hunger: 12 Myths*, Earthscan Publications Ltd., Londres (1ª ed. por Grove Press, EE.UU., 1986).

PLATTEAU, Jean-Philippe (1990), «The food crisis en Africa: a comparative structural analysis», en DREZE, Jean y Amartya SEN, *The Political Economy of Hunger*, vol. 2: *Famine Prevention*, Clarendon Press, Oxford, pp. 278-387.

RANGASAMI, Amrita (1985a), «Failure of Exchange Entitlements Theory of Famine. A Response», en *Economic and Political Weekly*, vol. XX, nº 41, 12 de octubre, Bombay, pp. 1747-1752.

RANGASAMI, Amrita (1985b), «Failure of Exchange Entitlements Theory of Famine. A Response» (continuación), en *Economic and Political Weekly*, vol. XX, nº 42, 19 de octubre, Bombay, pp. 1797-1801.

REYNA, Stephen P. (1991), «What is to be done? An Historical Structural Approach to Warfare and Famine», en DOWNS, R. E., D. O. KERNER y S. P. REYNA (eds.), *The Political Economy of African Famine*, Gordon and Breach Science Publishers, Philadelphia, pp. 339-371.

SEN, Amartya (1981), *Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford University Press, Oxford.

SEN, Amartya (1991), *Wars and Famines: on Divisions and Incentives*, Development Economics Research Programme, Suntuary-Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines, DEP nº 33, octubre, Londres.

SEN, Amartya (1992), «¿Puede la democracia impedir las hambrunas?», en *Claves de razón práctica*, nº 28, diciembre, Madrid, 2-9.

SIVARD, Ruth Leger (1992), *El planeta en la encrucijada*, CIP-ICARIA, Barcelona (1ª ed. en inglés por World Priorities, Washington, 1991).

SLIM, Hugo y Angela PENROSE (1994), «UN Reform in a Changing World: Responding to Complex Emergencies», en MacRAE y ZWI (1994a), pp. 194-208.

TURTON, David (1991), «Warfare, vulnerability and survival: a case from southwestern Ethiopia», *Disasters*, vol. 15, n° 3, septiembre.

VINCENT, Shaun (1994), «The Mozambique Conflict (1980-1992)», en CRANNA, Michael (ed.), *The True Cost of Conflict*, Earthscan Publications Ltd, Londres, pp. 81-112.